

CUARTA SALA UNITARIA

RECURSO DE REVISIÓN

EXPEDIENTE: 01/2013-IV

ACTOR: Partido Político "Movimiento Ciudadano".

AUTORIDAD RESPONSABLE:
Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato.

TERCEROS INTERESADOS: Partido
Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de
México.

MAGISTRADO: Héctor René García
Ruíz.

RESOLUCIÓN.- Guanajuato, Guanajuato, veintisiete de febrero de dos mil trece.

VISTO para resolver el expediente electoral número **01/2013-IV**, relativo al recurso de revisión interpuesto por el ciudadano **Luís González Reyes**, quien se ostenta como Representante Propietario de **Movimiento Ciudadano** ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra del acuerdo número CG/001/2013 de fecha dieciocho de enero de dos mil trece, emitido por el referido Consejo, mediante el cual se determinó el monto del financiamiento público al que tienen derecho los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del citado Instituto, para el año dos mil trece; mismo que fue aprobado en sesión extraordinaria de igual fecha.

R E S U L T A N D O:

PRIMERO.- Con el escrito de cuenta, se formó el expediente respectivo, radicándose en esta Cuarta Sala Unitaria y registrándose en el libro de gobierno bajo el número **01/2013-IV**, que le correspondió.

El siete de febrero de dos mil trece, se tuvo al **Partido Movimiento Ciudadano**, interponiendo el recurso de revisión, en contra del precitado acuerdo, a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Luis González Reyes.

SEGUNDO.- Con el recurso de cuenta, el promovente designó como autorizados para oír y recibir todo tipo de notificaciones y señaló como domicilio en esta ciudad capital, para los mismos efectos, el sito en Carlos María de Bustamante número 19 del Fraccionamiento Independencia de esta ciudad capital, y como autorizados a los ciudadanos Manuel Andrez Navarro Caraza, Eduardo Ramires Pérez y René Rojas Hernández.

TERCERO.- Para acreditar su personería, el promovente adjuntó certificación de fecha veintiuno de enero de dos mil trece, expedida por el Licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Secretario del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, donde se establece que en los archivos de la mencionada Secretaría existen documentos que acreditan al ciudadano **Luis González Reyes**, como Representante Propietario del Partido **Movimiento Ciudadano** ante el Consejo General del mencionado instituto, y que se encuentra agregada a foja 20 del expediente en que se actúa.

CUARTO.- El siete de febrero de dos mil trece, se requirió al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por conducto de su presidente, a fin de que remitiera a este órgano jurisdiccional, en un término que no excediera de **24 horas**, contadas a partir de su notificación del presente, copia certificada de:

1.- Acuerdo CG/143/2012 de fecha treinta de agosto de dos mil doce.

2.- Presentación del Partido Político Movimiento Ciudadano, en el mes de noviembre de dos mil doce de la constancia de Partido Político Nacional, para los efectos de la fracción II del artículo 43 bis de la Ley Comicial y el acuerdo que recayó a dicho acto.

En el mismo término, se le requirió, para que informara si movimiento ciudadano había perdido el registro como Partido Político y en su caso, la constancia que lo acreditara.

El once de febrero de este año, se tuvo al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por cumpliendo los requerimientos que anteceden, en la siguiente forma:

Se le tuvo por anexando las siguientes copias certificadas:

a) Legajo de copias certificadas del Acuerdo número CG/143/2012;

b) Legajo de copias certificadas de la cuenta y vista recaída al escrito del veintisiete de septiembre de dos mil doce, signado por el licenciado Juan Manuel Castro Rendón, representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral y su anexo, e informados por el Secretario del Consejo General del Instituto Electoral en sesión extraordinaria celebrada el quince de octubre de dos mil doce;

c) Legajo de copias certificadas de la cuenta y vista recaída al escrito del veintidós de enero de dos mil trece, signado por el licenciado Juan Manuel Castro Rendón, representante del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto

Federal Electoral y sus anexos, e informados por el Secretario del Consejo General del Instituto Electoral en sesión ordinaria celebrada el treinta de enero de dos mil trece; y,

d) Legajo de copias certificadas del Acuerdo número 1, aprobado por el Consejo General en sesión ordinaria celebrada el veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

En el escrito de referencia, informó la autoridad responsable:

... que a esta fecha el Instituto Federal Electoral no ha comunicado que Movimiento Ciudadano haya perdido su registro como partido político nacional, no obstante lo cual obran en los archivos de esta Secretaría del Consejo General, los documentos referidos en el punto que antecede relativos a la vigencia del registro de dicho instituto político. Asimismo, y en lo concerniente a la acreditación de Movimiento Ciudadano, le remito copia certificada del acuerdo número 1, aprobado en la sesión ordinaria del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, mediante el cual se acreditó como partido político nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a Convergencia por la Democracia, hoy Movimiento Ciudadano, acreditación que actualmente se encuentra vigente.

QUINTO.- Dentro del plazo de cuarenta y ocho horas que les fue concedido a los terceros interesados, contado a partir de que les fue notificada la radicación respectiva y en concordancia con el último párrafo del artículo 307 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, con el objeto de que comparecieran a exhibir pruebas o rendir los alegatos que a su interés conviniera, comparecieron los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

El doce de febrero de dos mil trece, se tuvo por reconocida la personalidad de los ciudadanos **Vanessa Sánchez Cordero** y **Martín Reyna Martínez**, como Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México y Representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en virtud de que la justificaron con la certificación de fecha once de febrero de dos mil trece y

dieciocho de enero de dos mil trece, expedidas por el Licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Secretario del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de la que se deriva la acreditación como representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México y representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

En ese proveído se les tuvo por dando contestación en tiempo y forma, admitiéndoseles como pruebas las siguientes:

a) En lo que respecta a las ofrecidas por el Partido Verde Ecologista de México, se admitieron:

1.- La documental anexada consistente en certificación de la documental que acredita la personalidad de Vanessa Sánchez Cordero;

2.- La presuncional legal y humana.

b) En lo que atañe a las ofertadas por el Partido Revolucionario Institucional, se admitieron:

1.- Copia certificada que acredita el carácter del licenciado Martín Reyna Martínez.

2.- Copia certificada del acuerdo CG/143/2012, de fecha treinta de agosto de dos mil doce.

3.- La presuncional legal y humana.

De los documentos admitidos se dio vista al recurrente, a la autoridad responsable y demás terceros interesados, por el término de 24 horas contadas a partir de la notificación de ese proveído, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en torno al documento antes detallado, sin que lo hubieren hecho.

Finalmente al Partido Revolucionario Institucional, se le tuvo por anunciando como prueba documental la certificación del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, en cuanto a demostrar si en contra del acuerdo CG/143/2012, fue interpuesto o no medio de impugnación, habiendo aportado dicho documento el quince de febrero del año actual.

En tanto que el trece de febrero de dos mil trece, se tuvo al ciudadano **Arturo Navarro Navarro**, compareciendo como Secretario General del Partido Acción Nacional en Guanajuato, en virtud de que la justificó con la certificación de fecha veintiséis de junio de dos mil doce, expedida por el Licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Secretario del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

En ese proveído se le tuvo al Partido Acción Nacional, por dando contestación en tiempo y forma al recurso de revisión interpuesto, habiéndosele admitido como pruebas:

1.- La documental pública anexada consistente en la certificación de la documental que acredita la personalidad de Arturo Navarro Navarro;

2.- La presuncional legal y humana.

Respecto de la prueba documental, se dio vista del mismo al recurrente, a la autoridad responsable y demás terceros interesados, por el término de 24 horas contadas a partir de la notificación de ese proveído, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que lo hubieran hecho.

SEXTO.- Concluido el término otorgado a los terceros interesados, se pronunció auto de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, a través del cual se decretó precluido el derecho procesal de las partes, así como de los terceros interesados, para ofertar medios probatorios y rendir alegatos.

SÉPTIMO.- Por ser el momento procesal oportuno, el titular de esta Sala se pronuncia respecto a las pruebas ofrecidas por el promovente; siendo las siguientes: **a)** Certificación de fecha veintiuno de enero del presente año, expedida por el Licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en donde hace constar que el ciudadano Luis González Reyes es representante propietario de Movimiento Ciudadano ante ese Consejo, **b)** Copia certificada del acuerdo CG/001/2013 aprobado en sesión extraordinaria efectuada el dieciocho de enero de dos mil trece por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; y, **c)** la presuncional legal y humana; medios de convicción que fueron admitidos y serán valorados en el cuerpo de la presente resolución. Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 317, 318, 319, 320 y 321 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Al estar las probanzas señaladas como proveídas por este órgano resolutor y dentro del plazo legal, se procede a dictar la resolución que en derecho corresponda; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Esta Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, es competente para resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 286, 287, 288, 289, 298, 300, 301, 306, 307, 308, 317, 327, 328, 335 y 352 Bis, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato; así como los numerales 19, 21 fracción III, 88, 89, 100 y 101 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato.

SEGUNDO.- En atención a que la procedencia del análisis y resolución de la cuestión de fondo efectivamente planteada en la litis, se encuentra supeditada a que en el caso no se surta o actualice algún supuesto procesal o sustantivo que pudiese impedir la emisión de un pronunciamiento jurisdiccional con tales características, es necesario verificar, en primer término, si en el caso se colman los requisitos indispensables que para la promoción del medio de impugnación, se encuentren detallados en el artículo 287 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, realizando también el análisis oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento, a efecto de dilucidar si en el caso es jurídicamente posible la emisión de un pronunciamiento de fondo o, en su defecto, si se actualiza algún supuesto que impida entrar al análisis de la controversia jurídica planteada.

De dicha verificación se desprende que los requisitos mínimos de los medios de impugnación, señalados por el numeral 287 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, fueron satisfechos, al haberse interpuesto el recurso por escrito, en los cuales consta nombre, domicilio y firma autógrafa del promovente, quien actúa como representante propietario del Partido **Movimiento Ciudadano**; identificando de manera precisa la resolución que se impugna; la autoridad responsable; expresando los antecedentes de la resolución, los preceptos legales que se estiman violados, los agravios que se consideran causados y los medios probatorios que se ofrecen.

TERCERO.- Causas de improcedencia y sobreseimiento.- De lo preceptuado por el artículo 1° del Código Electoral del Estado, el cual establece que sus disposiciones son de orden público y de observancia general, y considerando que la posibilidad jurídica de análisis y resolución de la cuestión de fondo efectivamente planteada en la litis se encuentra supeditada a que en el caso no se surta o actualice algún supuesto procesal o sustantivo, es que su examen resulta oficioso, por lo tanto es necesario abordar el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento, con independencia de las que se hicieron valer por las partes.

El primer párrafo del artículo 325 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, establece:

***Artículo 325.-** En todo caso los medios de impugnación se entenderán como **notoriamente improcedentes**, y **por tanto serán desechados de plano**, cuando:*

[...]

De la anterior disposición legal se desprende que el Tribunal Electoral, actuando en pleno o en Salas unitarias, debe desechar un medio de impugnación, cuando encuentre un motivo de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por «*notoriamente*», debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.

En esos términos, un motivo de improcedencia notorio es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, por haberse advertido claramente de las constancias que integran el sumario y que además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y en su caso, a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y los terceros interesados hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.

Por identidad de razones y en atención a los conceptos jurídicos generales de que trata, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia número 128/2001, que a la letra dice:

«CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.»¹

En consecuencia, se estima pertinente revisar los supuestos previstos en el artículo 325 del código de la materia, a efecto de estar en condiciones de determinar si en el caso se actualiza algún supuesto de improcedencia del medio de impugnación, del modo que enseguida se expresa.

I. La causal contenida en la fracción I del artículo 325 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, relativa a que el recurso de revisión presentado carezca de la firma del promovente, no se actualiza, en virtud de que, consta en el escrito que contiene el medio de impugnación en estudio, la firma autógrafa de **Luis González Reyes**.

II. Tocante a la causal de improcedencia prevista por la fracción III del artículo 325 de la ley comicial de nuestro Estado, que establece como supuesto el hecho de que el acto impugnado no afecte el interés jurídico del recurrente, ha de señalarse que tal

¹*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803 del Tomo XIV.*

exigencia debe apreciarse sólo desde una perspectiva formal, ya que no es el momento de analizar el fondo del recurso, esto es, determinar si existe un auténtico interés jurídico del partido político **Movimiento Ciudadano**, que sea susceptible de trascender en su perjuicio; por lo que basta que en la especie el recurrente haya intervenido en el acto cuestionado, para que éste sea susceptible de afectar sus derechos y, por ello, le surte interés en promover el presente recurso.

Corrobora lo expresado, la jurisprudencia número **S3ELJ 07/2002**, sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dice:

INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.- La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla general, el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendiente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político-electoral violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la conculcación del derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-068/2001 y acumulado. Raymundo Mora Aguilar. 13 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-363/2001. Partido Acción Nacional. 22 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-371/2001. Partido Acción Nacional. 22 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos.

III.- Por lo que hace a la causal de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 325 de la ley electoral de nuestro Estado, relativa a la personería del ejercitante de la acción, dicho presupuesto procesal ha quedado debidamente satisfecho, según se desprende de las constancias del sumario.

Lo anterior obedece a que, en los autos del recurso de revisión, obra documento debidamente certificado expedido por la

autoridad administrativa electoral competente, de la cual se acredita que el recurrente tiene el carácter con que se ostenta.

Dicha documental pública permite a esta Sala estimar acreditada la personería del recurrente y, en consecuencia, su legitimación para accionar, de conformidad con el artículo 318 fracción II, del código de la materia, por lo que se les concede valor probatorio pleno en cuanto a su contenido, al constituir el medio adecuado para tener por acreditado el presupuesto procesal en análisis de acuerdo a lo establecido por el numeral 320 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y que aparece anexado a los autos a foja 20.

IV. Las causas de improcedencia que se contienen en las fracciones VI y XI del artículo 325 del Código Electoral del Estado, referentes a que no se haya interpuesto previamente otro recurso procedente para obtener la modificación, revocación o anulación del acto o resolución impugnado, o que en contra de dicho acto proceda un medio de impugnación diverso, no se actualizan en razón de que en el mencionado compendio normativo no se exige agotar previamente otro recurso, ni se contempla otro medio de impugnación que tenga como finalidad modificar, revocar o anular los actos que en el caso en estudio se impugnan.

En efecto, de acuerdo al contenido de los artículos 294 y 302 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, que prevén los medios de impugnación denominados de revocación y de apelación, así como del análisis de sus respectivos supuestos de procedencia, se concluye que no encuadra en ellos la resolución impugnada; por el contrario, es correcta la interposición de los recursos de revisión por estar consignada la resolución combatida dentro de las hipótesis contenidas en el numeral 298, fracción VI, del citado ordenamiento.

V. El supuesto de improcedencia que proviene de la fracción VII del artículo 325 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, referido a que se esté tramitando otro recurso interpuesto por el propio promovente, no se actualiza, ya que en este órgano jurisdiccional no obra constancia alguna en tal sentido.

VI.- Las causas que se establecen en las fracciones VIII y IX del precepto antes referido, tampoco se actualizan, en virtud de que como se desprende del estudio del recurso, esto no se promueve en contra de alguna resolución que haya sido materia de otro medio de impugnación resuelto en definitiva y mucho menos emitida en cumplimiento a una resolución firme pronunciada con motivo de diverso recurso.

VII. Finalmente, la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 325 de la Ley Comicial del Estado, tampoco se presenta, al no existir disposición expresa del mismo cuerpo normativo que haga improcedente el análisis y resolución de la cuestión litigiosa efectivamente planteada.

En lo que atañe a los supuestos de sobreseimiento del medio de impugnación, previstos por el artículo 326 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, debe señalarse lo siguiente:

I.- La primera causal establecida en el precepto antes invocado, no se actualiza, en virtud de que en autos no obra constancia alguna que indique que el promovente se haya desistido expresamente del recurso interpuesto.

II.- Tampoco resulta de las constancias que integran las actuaciones, elemento alguno que demuestre la inexistencia de la resolución recurrida; por el contrario, obran en el expediente de revisión la documental pública, en donde se acredita el acto reclamado, que consiste, en el acuerdo CG/001/2013, aprobado en sesión ordinaria de fecha dieciocho de enero del presente año del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, misma que hace prueba plena en los términos de los artículos 318 fracción II, y 320 primer párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, con la cual se prueba la existencia de la resolución recurrida.

III.- En relación al supuesto previsto en la fracción III del artículo 326 de la ley electoral de nuestro Estado, debe decirse que en el sumario no existen probanzas que acrediten que las causas que se invocan como generadoras de la impugnación hayan desaparecido con motivo de hechos o actos posteriores a la presentación del recurso.

IV.- Referente al supuesto fáctico contenido en la fracción VI del artículo 326 de referencia, no es dable actualizarse, en atención a que el recurrente es un Partido Político, dado que el fallecimiento, suspensión y privación de los derechos políticos electorales es propio de las persona físicas y no de los Partidos Políticos.

Sin embargo, en el caso, se considera que se surten las fracciones II y III del artículo 325 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y consecuente la identificada en la fracción IV del numeral 326 de la misma ley comicial.

Se sostiene lo anterior, partiendo de que el recurrente consintió tácitamente la génesis de la resolución impugnada, es

decir, el acto jurídico que le privó de recibir el financiamiento público no fue determinado en el acuerdo que ahora recurre, sino en uno anterior, que no fue impugnado en su momento oportuno y que precisamente por los fundamentos legales y considerativos de los que se valió el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para determinar la pérdida de financiamiento público al partido político recurrente, ya no pueden ser objeto de revisión.

Para sostener lo anterior, se debe considerar que la función jurisdiccional es una potestad atribuida a determinados órganos para dirimir cuestiones contenciosas entre diversos gobernados pero, al mismo tiempo, es un deber impuesto a esos órganos, debido a lo cual, éstos no tienen la posibilidad de negarse a ejercerla, así que en este orden de ideas, la autoridad jurisdiccional como tal, no puede hacer más de lo que las leyes expresamente le confieren y, en ese sentido, deben hacer uso de los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional, lo anterior en congruencia con lo establecido en el primer párrafo del artículo 2 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

Al respecto, debe recordarse que no sólo los órganos jurisdiccionales tienen el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos, sino también los gobernados, esto es, deben someterse necesariamente a las formas que el legislador previó.

En razón de lo anterior, la existencia de determinadas formas y de plazos concretos para acceder a la justicia no tienen su origen en una intención arbitraria y caprichosa del Constituyente de dotar al legislador ordinario con un poder arbitrario.

Las reglas establecidas, responden a la intención de aquél de facultar a éste para que pueda establecer mecanismos que garanticen el respeto a las garantías de seguridad jurídica y dentro de éstas, la de legalidad en los procedimientos.

Con lo expuesto, la garantía de seguridad jurídica se manifiesta como la posibilidad de que los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente, es decir, bajo los términos y plazos que determinen las leyes, como lo establece el artículo 17 Constitucional.

Entonces, esas condiciones que se establecen previniendo los posibles conflictos que puedan suscitarse, son mecanismos que sirven para preservar la seguridad jurídica de los implicados en la tutela jurisdiccional. Así, el solicitante sabrá exactamente cuándo y ante quién debe ejercer su derecho, los requisitos que debe reunir para hacerlo, los plazos para ofrecer y desahogar sus pruebas, etcétera.

Con lo hasta aquí expuesto, se puede afirmar que existe una garantía de acceso a la justicia que encuentra sus límites en las condiciones y plazos que el legislador ordinario establece para el cumplimiento de la garantía de seguridad jurídica.

Por lo anterior, precisamente porque esas condiciones y plazos encuentran un fundamento constitucional (garantía de seguridad jurídica), deben ser acatados, como ya se dijo, tanto por el órgano encargado de la función jurisdiccional, como por las partes que solicitan el funcionamiento de dicho órgano.

Dentro de esas condiciones, para poder analizar el fondo de la cuestión recurrida, se encuentra la situación relativa a que el acto

jurídico tildado de ilegal no se encuentre firme, es decir, que el acuerdo recurrido no haya sido motivo de pronunciamiento en fecha anterior y que no represente la ejecución de un acto jurídico dictado con anterioridad.

Para lo anterior, toma relevancia lo establecido en el primer párrafo del artículo 290 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, que dice:

“Los actos o resoluciones de los órganos electorales que no se impugnen en los plazos previstos para ello, serán definitivos y firmes”.

Como puede advertirse, la norma en cita, sujeta a los actos o resoluciones emanados por los órganos electorales a que sean impugnadas dentro de los plazos previstos para ello, estimándolos para el caso que no sean recurridos, como definitivos y firmes, es decir los considera inmutables.

La definitividad es la cualidad o característica de definitivo; así, si se dice que algo adquirió “definitividad”, se afirma que ha adquirido la cualidad o característica de “definitivo”. Esta palabra es un adjetivo, es decir, expresa una cualidad o accidente de algo, califica al sustantivo. De forma tal que “definitivo” siempre es “algo” de lo que se afirma tal característica o cualidad.

Lo “definitivo” es lo seguro, aquello que no es incierto o dudoso. “Seguro” es una acepción que califica a aquello que es o resulta cierto, indubitable y en cierta manera infalible, lo firme, constante y que no está en peligro de faltar o caerse. “Cierto” es una palabra que aplicamos a aquello acerca de lo cual no se tiene duda alguna. La cualidad de “cierto” es la “certeza”, sinónima de certidumbre, evidencia, seguridad.

Así, cuando se afirma que algo ha alcanzado la característica de definitividad lo que se intenta evidenciar es que ese algo es seguro, es cierto y no se tiene duda alguna al respecto.

Conforme al principio de definitividad en materia electoral, no existe la posibilidad jurídica de regresar a una etapa que ha concluido, pues la ley fija plazos para que dentro de ellos se produzcan ciertos actos jurídicos, con el fin de que las normas que prevén los momentos de inicio y término de diversas fases de los procesos electorales sean observadas.

Por lo anterior, la ausencia de definitividad y firmeza es un requisito de procedencia del recurso de revisión, en razón de que debe existir la posibilidad de que la violación alegada pueda ser reparada de manera material y jurídicamente posible dentro del plazo establecido en la norma comicial.

El objetivo de este principio, es evitar la posibilidad de que los recurrentes puedan regresar a etapas concluidas, pues de lo contrario no habría certeza jurídica y provocaría que los actos o resoluciones electorales pudieran ser recurridas en forma indefinida o bien, impedirían la ejecución del acto o resolución bajo argumentos tendentes a desvirtuar el que ya se encuentra firme.

A este respecto cabe citar que el primer párrafo del artículo 286 del Código electoral, señala que los medios de impugnación regulados por ese código, tienen por objeto garantizar que todos los actos o resoluciones dictadas por los organismos electorales y en su caso, por las salas unitarias del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, se sujeten invariablemente a los principios constitucionales de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, así como dar definitividad a los distintos

actos y etapas de los procesos electorales; y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos del estado.

Es indudable que una de las principales cualidades que deben de observarse para resolver de los medios de impugnación interpuestos, es la relativa a la certeza, la cual podemos entender como la razonable posibilidad de predecir distintas conductas que el derecho exige a los sujetos obligados. Así desde un punto de vista normativo, el derecho tiene por función que aquellas conductas que están permitidas como prohibidas por la ley sean previsibles para todos los gobernados.

Bajo este contexto, el principio de certeza se traduce en la previsibilidad con la que deben contar los intervinientes de un proceso comicial respecto de los actos que sucederán en él, o bien, acerca de la calidad de ciertos e inmutables que adquieren esos acontecimientos al momento de emitirse o de surtirse en diversas condiciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el principio de certeza estriba en dotar de facultades expresas a las autoridades locales, de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente y de manera clara las reglas a las que están sujetas su propia actuación y la de las autoridades locales, según se deduce de la siguiente jurisprudencia:

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que

las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.²

En este orden de ideas, el acto o resolución materia del recurso de revisión no puede ser recurrido, conforme a los principios de definitividad, firmeza y certeza, cuando en contra del mismo se hacen valer argumentos materia de otro acto jurídico que no fue recurrido en su momento procesal y que por ende, ha adquirido definitividad y firmeza, tornándose irrevocable e inmodificable.

En torno a la improcedencia aludida, el artículo 325 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en sus fracciones II y IV; establece:

Artículo 325.- *En todo caso los medios de impugnación se entenderán como notoriamente improcedentes, y por tanto serán desechados de plano, cuando:*

(...)

II. Se hayan consentido expresa o tácitamente el acto o resolución impugnados. Se entiende que hubo consentimiento tácito cuando el medio de impugnación se presente ante el órgano electoral competente fuera de los plazos que para tal efecto señala este código;

(...)

IV. Se hayan consumado de manera irreparable los efectos del acto o resolución impugnados. Tratándose de medios de impugnación interpuestos en contra de los actos o resoluciones dictados durante el desarrollo de un proceso electoral, sólo se considerarán irreparablemente consumados los efectos de dichos actos o resoluciones, cuando se advierta que al resolverse las violaciones alegadas, se afecte un acto o resolución sobrevenidos que no tengan ninguna relación de causalidad con el acto o resolución impugnados, de manera que la ilegalidad de éstos no traiga aparejada la irregularidad de aquéllos;

(...)

Las causales de improcedencia serán examinadas de oficio.

² Jurisprudencia P/J./144/2005, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 111 del tomo XXII, Noviembre de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época.

A este respecto, se conceptualiza al consentimiento tácito, como la anuencia callada, es decir, el que se deduce a raíz de que el afectado por el acto de autoridad –intrapartidaria o de cualquier autoridad electoral—, no actúa oportunamente para defenderse en los términos que marque la ley.

El consentimiento tácito implica la falta de impugnación de un acto de autoridad conculcador de derechos político electorales dentro del término establecido en el código electoral.

Cabe referir que los actos consentidos tienen íntima relación con el principio de preclusión procesal el cual consiste en la pérdida de una facultad procesal al no efectuar un acto procesal oportunamente.

En efecto, el tiempo que dura el proceso, se mide fundamentalmente, a través de plazos y términos; la incidencia de tiempo se mira en diversos institutos, tanto en los plazos y términos, como en la preclusión, la rebeldía, la caducidad de la instancia y la cosa juzgada.

Con la institución de la preclusión se obtiene respeto al orden y a la secuencia procesal, impidiendo que las partes ejerzan las facultades o derecho que la ley instrumental les concede en forma inoportuna o anárquica, obteniéndose con ello celeridad procesal en la forma adecuada y ordenada en las diversas etapas del procedimiento.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, existe un consentimiento tácito del partido recurrente, en la causa que generó el acuerdo impugnado, en virtud de que no obra constancia que demuestre que su antecedente fue recurrido y que el mismo fue modificado o revocado para el efecto de que el Partido Político Movimiento Ciudadano tenía derecho a financiamiento público, por lo menos para la mantención de oficina y gastos de representación, por lo que consecuentemente los efectos del acuerdo recurrido se han tornado irreparables, dado que el mismo sólo es la ejecución del diverso acuerdo CG/143/2012, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 48, segunda parte, de fecha catorce de septiembre del año pasado, en el que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, **emitió la declaratoria relativa a los Partidos Políticos acreditados que tendrían derecho a recibir financiamiento público** para los años **dos mil trece al dos mil quince**, por haber obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en la elección ordinaria de dos mil doce.

Para una mayor claridad de lo expuesto, debe identificarse el acto impugnado consistente en el acuerdo número CG/001/2013, aprobado en sesión extraordinaria del dieciocho de enero de dos mil trece, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se determina el financiamiento público a que tienen derechos los Partidos Políticos para el año dos mil trece, mismo que es del tenor literal siguiente:

CG/001/2013

En la sesión extraordinaria efectuada el dieciocho de enero de dos mil trece, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente:

Acuerdo mediante el cual se determina el monto del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para el año dos mil trece.

RESULTANDO:

PRIMERO. Que en la sesión ordinaria del veintisiete de octubre de dos mil cinco, mediante acuerdo CG/036/2005, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 182, segunda parte, de fecha quince de noviembre del mismo año, el Consejo General dio respuesta al escrito presentado por el Partido - Revolucionario Institucional, relativo a que las ministraciones del financiamiento público que recibe dicho partido sean realizadas mediante transferencias electrónicas.

SEGUNDO. Que en la sesión extraordinaria del ocho de abril de dos mil seis, mediante acuerdo CG/045/2006, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 68, tercera parte, de fecha veintiocho de abril del mismo año, el Consejo General dio respuesta al escrito presentado por el Partido Acción Nacional, relativo a que las ministraciones del financiamiento público que recibe dicho partido sean realizadas mediante transferencias electrónicas.

TERCERO. Que en la sesión extraordinaria del dieciocho de febrero de dos mil ocho, mediante acuerdo CG/007/2008, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 35, segunda parte, de fecha veintinueve de febrero del mismo año, el Consejo General dio respuesta al escrito presentado por el Partido Verde Ecologista de México, relativo a que las ministraciones del financiamiento público que recibe dicho partido sean realizadas mediante transferencias electrónicas.

CUARTO. Que en la sesión ordinaria del veintisiete de marzo de dos mil ocho, mediante acuerdo CG/008/2008, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 59, segunda parte, de fecha once de abril del mismo año, el Consejo General dio respuesta al escrito presentado por el Partido de la Revolución Democrática, relativo a que las ministraciones del financiamiento público que recibe dicho partido sean realizadas mediante transferencias electrónicas.

QUINTO. Que en la sesión ordinaria del treinta de agosto de dos mil doce, mediante acuerdo CG/143/2012, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 148, segunda parte, de fecha catorce de septiembre del mismo año, el Consejo General emitió la declaratoria relativa a los partidos políticos acreditados que tendrán derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince, por haber obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en la elección ordinaria de dos mil doce.

SEXTO. Que en la sesión extraordinaria del cuatro de septiembre de dos mil doce, mediante acuerdo CG/144/2012, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 148, segunda parte, de fecha catorce de septiembre del mismo año, el Consejo General declaró la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y se asignaron a los institutos políticos Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, los diputados que por este principio les correspondieron.

SÉPTIMO. Que el licenciado Miguel Tafolla Cardoso, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado, mediante oficio número VRFE/13735/2012, del nueve de noviembre de dos mil doce, remitió a este Instituto un disco compacto que contiene la información de los ciudadanos empadronados en el Estado de Guanajuato con corte treinta y uno de octubre de dos mil doce, siendo un total de 4'182,513 ciudadanos.

OCTAVO. Que en el Diario Oficial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil doce, se publicó la resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del primero de enero de dos mil trece, en la que se señaló que todos los municipios del Estado de Guanajuato integran el área geográfica “B”.

Asimismo, se determinó que el salario mínimo general vigente a partir del primero de enero de dos mil trece para el área geográfica “B”, será de \$61.38 sesenta y uno pesos treinta y ocho centavos.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 31, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política local, y 46 del código comicial vigente en la entidad, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es un órgano público, autónomo, dotado de independencia funcional, de carácter permanente, con personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria, al que corresponde el ejercicio de la función estatal de organizar los procesos electorales. Dicha función estatal se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, definitividad, equidad, objetividad y profesionalismo.

SEGUNDO. Que el artículo 51 del código electoral local, señala que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al que corresponde la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.

TERCERO. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 63, fracción VI, del citado ordenamiento, corresponde al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, determinar el monto del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos, así como acordar el calendario de ministraciones de dicho financiamiento.

CUARTO. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 43 bis, fracción I, del código electoral local, el financiamiento público será calculado anualmente, considerando para ello la totalidad de los partidos políticos con registro en términos del mismo código y de acuerdo a la fórmula de cálculo y a las reglas de distribución que el mismo dispositivo legal establece.

El Gobierno del Estado por conducto del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, distribuirá entre los partidos políticos que tengan derecho al financiamiento el treinta y cinco por ciento del monto total en partes iguales. El sesenta y cinco por ciento restante se distribuirá en proporción igual a la que represente el número de votos logrados en la anterior contienda electoral de diputados locales.

En el caso de que exista remanente en la distribución del financiamiento, este se destinará al fortalecimiento del régimen de partidos políticos, distribuyéndose en la misma forma señalada en el párrafo anterior.

QUINTO. Que el artículo 43 bis, fracción III, del código comicial, señala que los partidos políticos nacionales deberán exhibir en el mes de noviembre de cada año, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, constancia actualizada de la vigencia de su registro y señalar domicilio legal dentro del territorio del Estado, para gozar de esta prerrogativa a partir de enero del año siguiente.

SEXTO. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 17, párrafo sexto, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, para que un partido político nacional tenga derecho a recibir financiamiento público, deberá haber conservado su acreditación y obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, lo cual deberá ser declarado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión que siga a la calificación de la elección.

Asimismo, el artículo 40, fracción II, párrafo segundo, de la ley electoral local, establece que para que un partido político tenga derecho a recibir financiamiento público, deberá haber conservado su registro o acreditación y obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, lo cual deberá ser declarado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión que siga a la calificación de la elección.

SÉPTIMO. Que el artículo 43 bis, fracción VIII, del código electoral, establece que el partido político que no alcance el dos por ciento de la votación válida estatal de diputado al Congreso del Estado de Guanajuato por el principio de mayoría relativa, no tendrá derecho al financiamiento público para las siguientes anualidades. Tampoco tendrá derecho a recibir las aportaciones bimestrales que sigan a la fecha de la resolución en que se declare la pérdida del registro, dentro del año que corra.

OCTAVO. Que el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, exhibieron en tiempo y forma ante este Consejo, constancias actualizadas de la vigencia de sus registros como partidos políticos nacionales expedidas por el Instituto Federal Electoral, colmándose con ello la exigencia prevista en la fracción III del artículo 43 bis, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

NOVENO. Que en el punto primero del acuerdo a que se hace referencia en el resultando quinto del presente acuerdo, se señaló que los institutos políticos Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, tendrán derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince, al haber obtenido más del dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en la elección ordinaria de dos mil doce.

Asimismo, en el punto segundo de dicho acuerdo, se determinó que los institutos políticos Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano no tendrán derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince, ya que no alcanzaron el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en la elección ordinaria de dos mil doce.

DÉCIMO. Que en el considerando décimo sexto del acuerdo mencionado en el resultando sexto de este acuerdo, se precisó que el cómputo estatal para la elección de diputados por el principio de representación proporcional fue el siguiente:

| Partido Político | Votación válidamente emitida | Porcentaje |
|----------------------------------|------------------------------|-------------|
| PAN | 940,130 | 45.1649% |
| PRI | 711,165 | 34.1652% |
| PRD | 159,342 | 7.6550% |
| PT | 40,573 | 1.9492 |
| PVEM | 126,899 | 6.0964 |
| Movimiento Ciudadano | 31,306 | 1.5040% |
| Nueva Alianza | 72,133 | 3.4654% |
| Votos válidos | 2'081,548 | 100% |
| Candidatos no registrados | 1,889 | |
| Votos nulos | 166,058 | |
| Votación total | 2'249,495 | |

Por otro lado, se señaló que el total de la votación válidamente emitida se obtuvo restando de la votación total emitida, los votos a favor de candidatos no registrados y los votos nulos, de conformidad con lo establecido en el artículo 281 de la ley electoral local.

UNDÉCIMO. Los porcentajes obtenidos por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de

México y Nueva Alianza, referidos en el considerando anterior, se tomarán como base para la distribución del financiamiento público a que tiene derecho cada uno de ellos.

El remanente del 3.4532% -integrado por el 1.9492% del Partido del Trabajo y el 1.5040% de Movimiento Ciudadano- se destinará al fortalecimiento del régimen de partidos políticos, distribuyéndose en los términos en que consigna el artículo 43 bis, fracción I, segundo párrafo, del código electoral, esto es, 35% del monto total del remanente en partes iguales entre los cinco partidos políticos mencionados, y el 65% restante en partes proporcionales de acuerdo a los porcentajes referidos para cada uno de los cinco institutos políticos citados en el presente considerando.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y 43 bis, fracciones I, III y VIII, 46, 51 y 63, fracción VI, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se somete a la consideración del Consejo General, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. De conformidad con lo previsto en el artículo 43 bis, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se determina que el financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos para el año dos mil trece, asciende a la cantidad de **\$51'344,529.59 cincuenta y un millones trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos veintinueve pesos cincuenta y nueve centavos**, los que serán distribuidos en la forma que señala la tabla que como **anexo uno** forma parte de este acuerdo.

SEGUNDO. Las ministraciones bimestrales a que se refiere la fracción IV del citado artículo de la ley de la materia, serán entregadas en los primeros cinco días hábiles del bimestre natural de que se trate, y para el que corre, por excepción, a más tardar el día dieciocho del presente mes.

TERCERO. El monto de las ministraciones bimestrales será el que se establece en la tabla marcada como **anexo dos** que integra este acuerdo.

CUARTO. Requiérase a Nueva Alianza por medio de su representante, para que acredite ante el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a la persona autorizada para recoger sus ministraciones bimestrales del financiamiento público.

QUINTO. Las ministraciones correspondientes al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, al Partido de la Revolución Democrática y al Partido Verde Ecologista de México serán efectuadas mediante transferencias electrónicas, de conformidad con los acuerdos referidos en los resultandos primero, segundo, tercero y cuarto.

SEXTO. Publíquense el presente acuerdo y sus anexos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Notifíquese por estrados.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 64, fracción III, y 65, fracción III, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, firman este acuerdo el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Secretario del mismo.

Dos firmas ilegibles.

De la lectura de este acuerdo, puede advertirse que el acuerdo recurrido, solamente se pronuncia respecto de lo siguiente:

1.- Determina el financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos para el año dos mil trece, mismo que asciende a la cantidad de \$51 '344,529.59 cincuenta y un millones trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos veintinueve pesos cincuenta y nueve centavos, los que serían distribuidos en la forma que señala la tabla que como anexo uno forma parte de ese acuerdo y en la cual no se menciona a Movimiento Ciudadano.

2.- Las ministraciones bimestrales a que se refiere la fracción IV del citado artículo de la ley de la materia, serían entregadas en los primeros cinco días hábiles del bimestre natural de que se trate, y para el que corre, por excepción, a más tardar el día dieciocho del presente mes.

3.- El monto de las ministraciones bimestrales será el que se establece en la tabla marcada como anexo dos que integra este acuerdo, en la que se no se menciona al Partido Político Movimiento Ciudadano.

4.- Ordenó requerir a Nueva Alianza por medio de su representante, para que acredite ante el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a la persona autorizada para recoger sus ministraciones bimestrales del financiamiento público.

5.- Las ministraciones correspondientes al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, al Partido de la Revolución Democrática y al Partido Verde Ecologista de México serían efectuadas mediante transferencias electrónicas, de

conformidad con los acuerdos referidos en los resultandos primero, segundo, tercero y cuarto.

Por otro lado, en el primer párrafo del considerando noveno, se hace referencia al acuerdo CG/143/2012, estableciendo que en dicho acto jurídico, se señalaron los institutos políticos que tendrían derecho a recibir financiamiento público para los **años dos mil trece al dos mil quince**, al haber obtenido más del dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en la elección ordinaria de dos mil doce.

En el segundo párrafo, hace remisión al punto segundo de dicho acuerdo, señalando que se encuentra **determinado** que los institutos políticos Partido del Trabajo y **Movimiento Ciudadano**, **no tendrían derecho a recibir financiamiento público** para los **años dos mil trece al dos mil quince**, ya que no alcanzaron el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en la elección ordinaria de dos mil doce.

Ahora, resulta oportuno citar el acuerdo 143/2012 aprobado en la sesión ordinaria efectuada el treinta de agosto de dos mil doce, por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en virtud de que es el antecedente de la resolución impugnada, mismo que es del tenor siguiente:

En la sesión ordinaria efectuada el treinta de agosto de dos mil doce, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente:

Acuerdo mediante el cual se emite la declaratoria relativa a los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que tendrán derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince, por haber obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en la elección ordinaria de dos mil doce.

RESULTANDO:

PRIMERO. Que el nueve de enero de dos mil doce, se instaló el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Asimismo, con fundamento en el artículo 16 del código electoral local, en la sesión ordinaria del veinticuatro de febrero del presente año, el Consejo General aprobó la convocatoria a elecciones ordinarias para Gobernador del Estado, diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa y representación proporcional y la renovación de los cuarenta y seis ayuntamientos, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 38, tercera parte, de fecha seis de marzo de dos mil doce.

SEGUNDO. Que en la sesión ordinaria del nueve de enero de dos mil doce, mediante acuerdo CG/001/2012, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 16, segunda parte, de fecha veintisiete de enero del mismo año, el Consejo General aprobó el monto de financiamiento público a que tienen derecho para el año dos mil doce los partidos políticos con registro y acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

TERCERO. Que en la sesión ordinaria del veinticuatro de febrero de dos mil doce, mediante acuerdo CG/011/2012, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 38, tercera parte, de fecha seis de marzo del mismo año, el Consejo General interpretó disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato referentes a las coaliciones, y se fijaron criterios.

CUARTO. Que en las sesiones extraordinarias del cuatro de julio de dos mil doce, los veintidós consejos distritales electorales efectuaron los cómputos distritales de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de la ley electoral local.

QUINTO. Que el veinte de julio de dos mil doce, la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado dictó resolución en el expediente electoral 25/2012-III, notificada al Instituto el mismo día, en la que se confirmó la sesión de computo distrital llevada a cabo el cuatro de julio de dos mil doce por el Consejo Distrital Electoral V, con cabecera en León, Guanajuato, atinente a la elección de diputado local por mayoría relativa, en la que resultó ganadora la fórmula postulada por la coalición denominada “Compromiso por Guanajuato”, integrada por Jorge Arena Elizondo como diputado propietario y Juan Manuel Arroyo Fuentes como diputado suplente.

Asimismo, se declaró la nulidad de los votos recibidos a favor de los partidos políticos contendientes respecto de las casillas 1465 básica, 1477 contigua 8, 1490 contigua 9, 1494 contigua 6, 1844 básica y 1851 contigua 1.

SEXTO. Que el veintisiete de julio de dos mil doce, la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado, dictó resolución en el expediente electoral 24/2012-II, notificada al Instituto el mismo día, en la que se confirmó la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, realizada por el Consejo Distrital Electoral VI, con cabecera en León, Guanajuato, y la expedición de la constancia de mayoría y validez, a favor de la fórmula de candidatos postulada por la coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, integrada por Roberto Mauricio Vallejo Rábago y Roger Christian James Albo, como propietario y suplente, respectivamente.

Asimismo, se decretó la nulidad de la votación recibida en las casillas 1608 contigua 1 y 1672 contigua 2, y se determinó adicionar al Partido Acción Nacional la cantidad de diez votos respecto a la casilla 1637 básica, ya que al momento de efectuar el cómputo distrital se sumaron solamente 161 votos en favor del instituto político mencionado, siendo que lo correcto son 171 votos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 31, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política local, y 46 del código comicial vigente en la entidad, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es un órgano público, autónomo, dotado de independencia funcional, de carácter permanente, con personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria, al que corresponde el ejercicio de la función estatal de organizar los procesos

electorales. Dicha función estatal se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, definitividad, equidad, objetividad y profesionalismo.

SEGUNDO. Que el artículo 51 del código electoral local, señala que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al que corresponde la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.

TERCERO. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 17, párrafo sexto, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, para que un partido político nacional tenga derecho a recibir financiamiento público, deberá haber conservado su acreditación y obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, lo cual deberá ser declarado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión que siga a la calificación de la elección.

Asimismo, el artículo 40, fracción II, párrafo segundo, de la ley electoral local, establece que para que un partido político tenga derecho a recibir financiamiento público, deberá haber conservado su registro o acreditación y obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, lo cual deberá ser declarado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión que siga a la calificación de la elección.

CUARTO. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 43 bis, fracción VIII, del código electoral local, el partido político que no alcance el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, no tendrá derecho al financiamiento público para las siguientes anualidades. Tampoco tendrá derecho a recibir las aportaciones bimestrales que sigan a la fecha de la resolución en que se declare la pérdida del registro, dentro del año que corra.

QUINTO. Que en el punto primero, numeral 5, del acuerdo a que se hace referencia en el resultando tercero del presente acuerdo, se precisó que cuando en las boletas electorales se marquen dos o más emblemas de partidos políticos integrantes de una coalición, el voto contará para el candidato pero no para los partidos políticos.

SEXTO. Que el resultado del cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, en cada uno de los veintidós distritos electorales fue el siguiente:

| Distrito electoral | AN | RI | RD | T | VEM | C | A | Coalición PRI-PVEM (votos múltiples) | Candidatos no registrados | Votos nulos |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|
| de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 36,220 | 32,044 | 4,623 | 1,714 | 3,412 | 557 | 2,594 | | 78 | 7,941 |
| I de San Luis de la Paz | 40,344 | 33,273 | 8,523 | 4,040 | 9,329 | 2,412 | 6,182 | | 99 | 9,308 |
| II de León | 50,314 | 32,922 | 3,394 | 964 | 4,769 | 964 | 2,125 | 4,637 | 89 | 5,674 |
| V de León | 64,642 | 51,114 | 4,971 | 1,864 | 6,909 | 1,388 | 3,895 | 9,500 | 162 | 7,227 |
| de León | 47,588 | 38,678 | 3,287 | 1,043 | 5,188 | 883 | 2,549 | 7,134 | 113 | 5,126 |
| I de León | 38,379 | 29,478 | 3,020 | 896 | 3,945 | 675 | 2,089 | 5,401 | 65 | 4,124 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|------|--------|
| II de León | 54,948 | 41,041 | 4,656 | 1,474 | 5,902 | 914 | 3,757 | 7,293 | 116 | 5,966 |
| III de Guanajuato | 36,007 | 42,024 | 7,161 | 1,910 | 9,617 | 1,233 | 3,140 | | 177 | 9,210 |
| X de San Miguel de Allende | 36,310 | 31,302 | 5,941 | 1,994 | 4,868 | 1,381 | 2,911 | | 76 | 9,282 |
| de San Francisco del Rincón | 54,700 | 42,619 | 7,012 | 1,018 | 4,897 | 613 | 3,300 | | 58 | 10,251 |
| I de Irapuato | 44,891 | 40,154 | 4,497 | 1,561 | 3,056 | 1,087 | 2,447 | | 128 | 9,278 |
| II de Irapuato | 42,691 | 38,748 | 4,098 | 1,284 | 2,750 | 1,038 | 3,014 | | 75 | 8,928 |
| III de Salamanca | 48,726 | 29,859 | 5,846 | 1,670 | 6,257 | 1,397 | 4,121 | | 50 | 8,006 |
| IV de Salamanca | 42,740 | 26,806 | 5,404 | 1,581 | 4,716 | 1,209 | 2,605 | | 46 | 6,593 |
| V de Celaya | 46,934 | 30,353 | 9,753 | 2,715 | 7,055 | 1,749 | 5,379 | 4,386 | 134 | 6,397 |
| VI de Celaya | 45,550 | 33,939 | 7,707 | 2,321 | 4,320 | 1,558 | 3,016 | 5,268 | 85 | 5,900 |
| VII de Apaseo el Grande | 41,561 | 26,926 | 7,759 | 1,852 | 7,078 | 8,054 | 4,645 | | 46 | 10,048 |
| VIII de Pénjamo | 38,584 | 35,464 | 7,515 | 2,039 | 2,458 | 291 | 1,496 | | 48 | 8,809 |
| IX de Valle de Santiago | 30,402 | 10,006 | 22,577 | 2,240 | 9,287 | 1,229 | 5,880 | | 54 | 6,542 |
| X de Yuriria | 31,104 | 20,888 | 6,175 | 3,605 | 14,879 | 915 | 2,158 | | 65 | 6,017 |
| XI de Salvatierra | 37,985 | 24,612 | 7,799 | 1,241 | 3,371 | 618 | 2,974 | | 61 | 6,762 |
| XII de Acámbaro | 28,689 | 18,677 | 17,231 | 1,479 | 2,732 | 1,067 | 1,713 | | 57 | 7,860 |
| otación total | 39,309 | 10,927 | 58,949 | 0,505 | 26,795 | 1,232 | 1,990 | 3,619 | ,882 | 65,249 |

SÉPTIMO. Que de acuerdo a lo señalado en los resultandos quinto y sexto del presente acuerdo, la votación total anulada en las casillas 1465 básica, 1477 contigua 8, 1490 contigua 9, 1494 contigua 6, 1844 básica y 1851 contigua 1, 1608 contigua 1 y 1672 contigua 2, es la siguiente:

| Casilla | PAN | PRI | PRD | PT | PVEM | MC | NA | Coalición PVEM múltiples) | PRI-(votos | Candidatos no registrados | V |
|---------|-----|-----|-----|----|------|----|----|---------------------------|------------|---------------------------|---|
| 65-B | 99 | 143 | 3 | 5 | 11 | 3 | 9 | | 33 | 0 | |
| 77-C8 | 168 | 144 | 13 | 4 | 14 | 2 | 13 | | 28 | 0 | |
| 90-C9 | 144 | 112 | 14 | 2 | 20 | 2 | 8 | | 25 | 0 | |
| 94-C6 | 98 | 131 | 4 | 2 | 17 | 2 | 10 | | 47 | 0 | |
| 144-B | 114 | 105 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | | 17 | 0 | |
| 151-C1 | 178 | 141 | 9 | 4 | 18 | 6 | 11 | | 34 | 1 | |
| 158-C1 | 143 | 130 | 7 | 4 | 17 | 7 | 10 | | 24 | 0 | |
| 172-C2 | 156 | 146 | 12 | 5 | 25 | 2 | 9 | | 26 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|----|----|-----|----|----|-----|---|
| tación | 1,100 | 1,052 | 64 | 27 | 130 | 26 | 70 | 234 | 1 |
|--------|-------|-------|----|----|-----|----|----|-----|---|

OCTAVO. Que a la votación referida en el considerando sexto de este acuerdo (correspondiente a los resultados de las sesiones de cómputos distritales para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa), deben restarse los votos anulados que han sido precisados en el considerando que antecede, además de sumarse diez votos al Partido Acción Nacional —de conformidad con lo determinado por la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado, en el expediente electoral 24/2012-II—, como se muestra en la siguiente tabla:

| Partido político | Votación total de cómputos distritales de diputados por el principio de mayoría relativa | Votación anulada | Votos adicionados | Total |
|--|--|------------------|-------------------|---------|
| PAN | 939,309 | 1,100 | 10 | 938,219 |
| PRI | 710,927 | 1,052 | | 709,875 |
| PRD | 158,949 | 64 | | 158,885 |
| PT | 40,505 | 27 | | 40,478 |
| PVEM | 126,795 | 130 | | 126,665 |
| MC | 31,232 | 26 | | 31,206 |
| NA | 71,990 | 70 | | 71,920 |
| Coalición PRI-PVEM (votos en ambos emblemas) | 43,619 | 234 | | 43,385 |
| Candidatos no registrados | 1,882 | 1 | | 1,881 |
| Votos nulos | 165,249 | 112 | | 165,137 |

NOVENO. Que acorde a lo precisado en el considerando que antecede, la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa queda integrada de la siguiente manera:

| Partido político | Votación válida estatal | Porcentaje | |
|--|-------------------------|-------------|----|
| PAN | 938,219 | 45.1664% | |
| PRI | 709,875 | 34.1738% | |
| PRD | 158,885 | 7.6488% | PT |
| | 40,478 | 1.9486% | |
| PVEM | 126,665 | 6.0977% | |
| Movimiento Ciudadano | 31,206 | 1.5023% | |
| Nueva Alianza | 71,920 | 3.4623% | |
| Votos válidos | 2'077,248 | 100% | |
| Candidatos no registrados | | 1,881 | |
| Votos nulos | 165,137 | | |
| Coalición PRI-PVEM (distritos III al VII de León, XV y XVI de Celaya) | 43,385 | | |
| —votos en ambos emblemas— | | | |
| Votación total | 2'287,651 | | |

El total de la votación válida estatal se obtiene restando de la votación total emitida, los votos a favor de candidatos no registrados y los votos nulos, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del código comicial local. Asimismo, debe precisarse que de acuerdo a lo señalado en el punto primero, numeral 5, del acuerdo CG/011/2012, aprobado por este Consejo General en sesión ordinaria celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil doce, cuando en las boletas electorales se marquen dos o más emblemas de partidos políticos integrantes de una coalición, el voto contará para el candidato pero no para los partidos políticos, por lo que para los efectos de este acuerdo, los votos en tal forma emitidos se consideran nulos.

DÉCIMO. Que la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, obtenida por los institutos políticos Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, así como su porcentaje de votación, son los siguientes:

| Partido político | Votación válida estatal | Porcentaje |
|------------------|-------------------------|------------|
| PT | 40,478 | 1.9486% |

Partiendo de lo anterior, se declara que los institutos políticos Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano no tendrán derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 17, párrafo sexto, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 40, fracción II, párrafo segundo, y 43 bis, fracción VIII, del código electoral local, pues no alcanzaron el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa.

Por otro lado, se declara que los institutos políticos Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, sí tendrán derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince, ya que obtuvieron más del dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, tal y como se desprende de los datos plasmados en el considerando noveno del presente acuerdo.

UNDÉCIMO. Que en lo concerniente a las restantes ministraciones bimestrales (septiembre-octubre y noviembre-diciembre) del financiamiento público correspondiente al año dos mil doce de Movimiento Ciudadano, es necesario realizar las siguientes precisiones.

El párrafo sexto del artículo 17 de la Constitución Política local, establece que para que un partido político nacional tenga derecho a recibir financiamiento público, deberá haber conservado su acreditación y obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, lo cual deberá ser declarado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión que siga a la calificación de la elección.

Asimismo, en el segundo párrafo de la fracción II, del artículo 40 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se estipula que para que un partido político tenga derecho a recibir financiamiento público, deberá haber conservado su registro o acreditación y obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, lo cual deberá ser declarado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión que siga a la calificación de la elección.

De las normas aludidas se desprende claramente que los partidos políticos nacionales que conserven su acreditación, solo podrán recibir financiamiento público si obtuvieron cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa.

Dichas normas, sin embargo, no precisan si debe suspenderse el financiamiento público a un partido político nacional que lo venía recibiendo, pero que en el presente proceso electoral no alcanzó el porcentaje referido.

De entrada, debe decirse que ni en la Constitución Política local ni en el código comicial local, se establece en forma expresa que en tales casos el financiamiento público deba suspenderse.

En la fracción I del artículo 43 bis, del código electoral del Estado, se establece que el financiamiento público será calculado anualmente, considerando la totalidad de los partidos políticos con registro en términos del propio código, y que se distribuirá entre los partidos políticos que tengan derecho al financiamiento el treinta y cinco por ciento del monto total en partes iguales, y el sesenta y cinco por ciento restante se distribuirá en proporción igual a la que represente el número de votos logrados en la anterior contienda electoral de diputados locales.

La fracción IV del artículo precitado, establece que los partidos políticos recibirán el financiamiento público bimestralmente, conforme al calendario que apruebe el Consejo General del Instituto. Sobre este particular, en la fracción VI del artículo 63 de la ley electoral local, se establece como atribución del Consejo General, la relativa a determinar conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 43 bis del propio código, el monto del financiamiento público a que tendrán derecho los partidos políticos y acordar el calendario para la ministración de dicho financiamiento.

Asimismo, en la fracción VIII del referido artículo 43 bis del código comicial local, se estipula que el partido político que no alcance el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, no tendrá derecho al financiamiento público para las siguientes anualidades, y que tampoco tendrá derecho a recibir las aportaciones bimestrales que sigan a la fecha de la resolución en que se declare la pérdida del registro, dentro del año que corra.

De la interpretación gramatical y sistemática de las normas aludidas, se desprende que el financiamiento público se otorga anualmente a los partidos políticos con derecho a ello, y que el mismo debe serles entregado bimestralmente. Asimismo, de la interpretación gramatical de la disposición contenida en la fracción VIII del artículo 43 bis del código electoral local, en el sentido de que el partido político que no alcance el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, no tendrá derecho al financiamiento público para las siguientes anualidades, se desprende que el derecho a recibir financiamiento se pierde a partir del siguiente año.

Por otro lado, debe considerarse que mediante el acuerdo CG/001/2012, del nueve de enero de dos mil doce, el Consejo General determinó el monto del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para el año dos mil doce. En dicho acuerdo se estableció el monto del financiamiento público al que tuvieron derecho los partidos políticos para el año dos mil doce, es decir, el monto se calculó de manera anual, sin que se hubiera establecido alguna limitante o condición para aquellos que no alcanzaran el dos por ciento de la votación válida para diputados de mayoría relativa en el presente proceso electoral.

Al respecto debe destacarse que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación³, ha señalado que el financiamiento que le es asignado a un partido político al inicio de un ejercicio fiscal, constituye una prerrogativa que es calculada atendiendo a la votación obtenida conforme a la elección inmediata anterior y le es otorgada de forma anual, siendo una cuestión aparte el que la entrega del financiamiento se haga mediante ministraciones bimestrales, pues ello solo es para que las prerrogativas del partido político se distribuyan durante todo un año, por lo que cuando a un partido político le ha sido otorgado un monto cierto como prerrogativa de financiamiento público por un año, atendiendo a la votación y representación obtenida en el proceso electoral anterior, el monto ya determinado no puede verse afectado por el hecho de haber perdido su registro, pues ello solo surtirá efectos hasta que el órgano electoral formule la distribución del financiamiento público para el siguiente año.

Atendiendo a las anteriores consideraciones, se puede concluir que los partidos políticos nacionales que vienen recibiendo financiamiento público durante el presente año, y que en el proceso electoral actual no alcanzaron el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, pero conservaron su acreditación, pierden el derecho de recibir financiamiento público para las siguientes anualidades, es decir, para los años dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, al menos, pero conservan su derecho a recibir la parte correspondiente del financiamiento público que les fue otorgado para el año dos mil doce, por lo que este Consejo General determina que Movimiento Ciudadano recibirá las restantes ministraciones bimestrales del financiamiento público correspondiente al año dos mil doce.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y 40, fracción II, párrafo segundo, 43 bis, fracción VIII, 46 y 51, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se somete a la consideración del Consejo General, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Los institutos políticos Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, tendrán derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince, al haber obtenido más del dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en la elección ordinaria de dos mil doce.

SEGUNDO. Los institutos políticos Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano no tendrán derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince, ya que no alcanzaron el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en la elección ordinaria de dos mil doce.

TERCERO. Por los motivos expuestos en el considerando undécimo de este acuerdo, Movimiento Ciudadano recibirá las restantes ministraciones bimestrales del financiamiento público correspondiente al año dos mil doce.

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Notifíquese por estrados.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 64, fracción III, y 65, fracción III, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, firman este acuerdo

³ En la resolución dictada en el expediente SUP-RAP-269/2009.

el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Secretario del mismo.

De lo transcrito, puede concluirse que en el acuerdo **CG/001/2013** efectuado en la sesión extraordinaria del dieciocho de enero de dos mil trece, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, no declaró que el Partido Político **Movimiento Ciudadano no tenía derecho a recibir financiamiento público**, sino que ello fue materia de declaración en el acuerdo **CG/143/2012**, pues textualmente determinó:

SEGUNDO. Los institutos políticos Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano no tendrán derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince, ya que no alcanzaron el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en la elección ordinaria de dos mil doce.

Con lo anterior, queda demostrado que no es el acuerdo **CG/001/2013**, el que declaró la pérdida al derecho a recibir financiamiento público **para los años dos mil trece a dos mil quince**, por no haber alcanzado el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en la elección ordinaria de dos mil doce, sino el diverso acuerdo **CG/143/2012**, siendo que el acuerdo impugnado solamente estriba sobre la ejecución del último citado, es decir, solamente se pronuncia sobre la cuantificación de las cantidades a que tienen derecho los partidos políticos sobre el financiamiento público, en los términos de la declaración contenida en el acuerdo **CG/143/2012**.

En tales condiciones al no dirigir el recurrente sus agravios a combatir la cuantificación del financiamiento público, sino la declaración de que no tiene derecho a ese financiamiento, es indudable que se actualizan las fracciones II y IV del artículo 325 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, pues tal declaración -no recibir financiamiento público- está dotada de definitividad y firmeza, precisamente porque no fue

impugnada en su momento procesal oportuno, actualizándose la existencia de consentimiento tácito y la consumación de manera irreparable de los efectos del acto cuya revocación pretende, misma que se reduce en la pretensión de que se revoque la negativa del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a que obtenga financiamiento público, pues sus agravios son dirigidos a ese fin.

En consecuencia, con fundamento en la fracción IV del artículo 326 de la ley comicial, debe sobreseerse el presente medio de impugnación.

CUARTO.- Con independencia de lo anterior, con la sola finalidad además de demostrar que no se han violentando los derechos del partido inconforme, se hace el siguiente estudio.

Por cuestión de método, técnica jurídica y sistema en los lineamientos o criterios jurídicos generales que habrán de observarse en el dictado de la presente resolución, a continuación se establecerán los principios jurídico-procesales que invariablemente se considerarán en la presente resolución. Lo anterior, a efecto de evitar repeticiones innecesarias en cada uno de los subsecuentes puntos de consideración, haciendo la salvedad, desde luego, de algún otro criterio, tesis relevante o jurisprudencia que sobre la litis planteada pudiese resultar pertinente acorde al desarrollo del estudio.

De tal manera, se precisa que la presente resolución jurisdiccional se sujetará al principio de congruencia, rector de toda resolución judicial, acorde al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia en materia administrativa número **I.1o.A. J/9**, que a letra dice:

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECEER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. *En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.*

En materia de valoración de los medios de convicción aportados al proceso, al realizar el análisis de las probanzas, operará el principio de adquisición procesal en beneficio del más preciso esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos sobre los que se suscite controversia jurídica, de conformidad con la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto literal reza:

ADQUISICIÓN PROCESAL. OPERA EN MATERIA ELECTORAL. *Opera la figura jurídica de la adquisición procesal en material electoral, cuando las pruebas de una de las partes pueden resultar benéficas a los intereses de la contraria del oferente, así como a los del colitigante, lo que hace que las autoridades estén obligadas a examinar y valorar las pruebas que obren en autos, a fin de obtener con el resultado de esos medios de convicción, la verdad histórica que debe prevalecer en el caso justificable, puesto que las pruebas rendidas por una de las partes, no sólo a ella aprovechan, sino también a todas las demás, hayan o no participado en la rendición de los mismos.*

Por tanto, todos los medios probatorios que obren en el sumario, con independencia de la parte procesal que las hubiere aportado, serán analizados y valorados a efecto de sustentar la decisión jurisdiccional, con el valor probatorio que en su momento para cada una de ellas se precisará.

En virtud de que el disidente expresa una diversidad de conceptos de lesión jurídica, que considera le genera el acto impugnado, es conveniente establecer que esta Sala Unitaria hará el análisis de los conceptos de agravio atendiendo al principio de exhaustividad, en el que debe fincarse toda decisión de fondo de una controversia jurídica, con apoyo en la Tesis Relevante sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que señala:

EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIO DE. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. *Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto del reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retaso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III, y 116 IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

De igual forma, se precisa que en el estudio de la litis, el juzgador habrá de interpretar lo manifestado por el accionante, a efecto de establecer con el mayor grado de precisión posible lo que se quiso decir y lograr determinar con exactitud la intención y causa de pedir, a efecto de lograr una recta administración de justicia, en concordancia con la jurisprudencia **S3ELJ-04/99**, que sostiene la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que se transcribe a continuación:

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. *Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y entienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se pueda lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.*

Al tenor de todo lo expresado, procede pues el análisis de los agravios planteados por **Movimiento Ciudadano**, a efecto de procurar una adecuada tutela judicial de los valores democráticos característicos de nuestro sistema electoral, reconocidos por las disposiciones constitucionales y legales que integran la normativa a que habrá de sujetarse el presente fallo, conforme a lo establecido por las tesis de jurisprudencia que a continuación se invocan:

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. De conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3o. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.

QUINTO.- El recurrente **Movimiento Ciudadano**, por conducto de su Representante Propietario, **Luis González Reyes**, expresó en su ocurso impugnativo los agravios que a continuación se transcriben literalmente:

AGRAVIOS

Es mi interés reproducir los siguientes criterios, antes de expresar los agravios que causa a mi representada la determinación adoptada por la autoridad electoral, respecto a la aprobación del Acuerdo CG/01/2013 de fecha 18 de enero de dos mil trece, mediante el cual se determina el monto del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para el año dos mil trece, que hoy combatimos, con el objetivo de que sean considerados a la hora de entrar al estudio de los mismos.

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit

curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.

Tercera Época

Juicio de revisión constitucional electoral.- SUP-JRC-041/99.-Coalición integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y revolucionario de las y los Trabajadores. 30 de marzo de 1999.- Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral.- SUP-JRC-127/99.-Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México.-9 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral.- SUP-JRC-291/2000.-Coalición Alianza por Querétaro.-1º De septiembre de 2000.- Unanimidad de votos.

Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, página 5, Sala Superior, tesis S3ELJ03/2000.

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.- *Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada.*

Tercera Época

Juicio de revisión constitucional electoral.- SUP-JRC-107/97.- Partido Revolucionario Institucional.- 9 de octubre de 1997.- Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral.- SUP-JRC-041/98.- Partido de la Revolución Democrática.- 26 de agosto de 1998.- Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-043/98.- Partido del Trabajo.- 26 de agosto de 1998.- Unanimidad de votos. **Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, páginas 11-12, Sala Superior, Tesis S3EL 02/98.”**

Por lo que una vez expuesto lo anterior, expreso los siguientes:

AGRAVIOS

PRIMERO.- Los Partidos Políticos Nacionales, al ser considerados como entidades de interés público, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que dichas formalidades no son excepción en el Estado de Guanajuato, se constituyen en sujetos de los derechos que la propia constitución federal, así como la local y las leyes de la materia establecen; y en este sentido, la ley establece con meridiana claridad que las Constituciones y Leyes de los Estados garantizan que los partidos políticos, reciban en forma equitativa financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes; así como que contarán con las condiciones necesarias para el debido cumplimiento del objeto y actividades que tienen encomendadas; es por ello que el acto de autoridad que se reclama, al trastocar las disposiciones constitucionales que se mencionan, produce el consiguiente agravio en perjuicio de mi representada, sin soslayar que el mismo resulta también violatorio de los principios rectores del derecho electoral, como se establecerá.

Lo anterior lo afirmamos sustentándonos en el artículo 41, Base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que lejos de ordenar la confiscación inmediata del financiamiento público al que tenemos derecho y aun no ejercido por el partido político, garantiza a nuestro Instituto Político contar con recursos para llevar a cabo sus actividades permanentes.

Además de que, debe considerarse que la autoridad administrativa electoral, que pretende despojar a Movimiento Ciudadano de su derecho a recibir financiamiento público para el periodo comprendido del 2013 al 2015, incurre además en una violación del artículo 14 constitucional, pues nos deja en un estado vulnerable, al no poder contar con el recurso económico para llevar a cabo las tareas que nos han sido encomendadas constitucionalmente; aunado a que se deja a nuestro Instituto Político en una situación de desigualdad y de falta de certeza para cualquier proveedor, y con ello nos coloca como sujetos no aptos para contraer compromisos con persona alguna, pues genera la incertidumbre de que aunque los partidos políticos por ley tengan derecho a recibir financiamiento para hacer frente a los compromisos que adquiera para el logro de sus fines, la autoridad administrativa al negarnos el mismo, nos deja sin sustento para llevarlas a cabo.

Así mismo, con la falta de entrega de dicha prerrogativa que pretende realizar la autoridad electoral en el periodo establecido, deja a mi representada vulnerable, pues se dejaran de cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores de Movimiento Ciudadano en la entidad; así como las obligaciones fiscales que le corresponden.

Bajo dicho orden de ideas, es de manifestarse que la legislación local no dispone que a partir de que los **Partidos Políticos Nacionales** no obtengan el porcentaje mínimo para obtener el derecho a que se les otorguen prerrogativas, el monto del financiamiento que por norma constitucional les corresponde para el logro de sus fines, por haber perdido su registro, le deba ser cancelado.

Y como ya hemos mencionado, en el artículo 41 párrafo segundo fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece, en lo que interesa, que la ley garantizará a los **Partidos Políticos Nacionales** contar de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, de acuerdo con las formas y procedimientos que se establezcan en ella; y que, en la propia ley, se deben señalar las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

Sin embargo, si en la ley no se encuentra establecido dicha circunstancia, donde la ley no distingue no cabe distinguir, y es el caso que para el Estado de Guanajuato, no existe disposición expresa de que dicha prerrogativa asignada a los **Partidos Políticos con registro nacional**, les deba ser cancelada por no obtener el porcentaje mínimo establecido que señala su legislación, pues existiría una vulneración al principio de supremacía constitucional, el hecho de que una circunstancia que no se encuentra prevista en una ley secundaria, se anteponga y pondere por encima de una disposición expresamente contenida en la norma suprema, en el caso, nuestra Carta Magna.

Por ello, es que se asevera que la determinación adoptada en el Acuerdo que se combate emitido por la autoridad electoral, nos deja en un estado de indefensión al no tener elementos para cumplir los fines por los que fueron creados los Partidos Políticos; así como la salvaguardar de los derechos de los trabajadores, proveedores y demás acreedores de Movimiento Ciudadano, que se pudieran ver afectados por un estado de insolvencia ante los compromisos contraídos a priori para los años subsecuentes.

Por lo anterior, es que resulta innegable el derecho de los Partidos Políticos Nacionales a recibir dichas prerrogativas, máxime que con las mismas como se ha establecido, se efectúan las actividades encomendadas en nuestra norma suprema; por lo que para hacer frente a las mismas se adquirieron compromisos, con la intención de solventarlos a futuro con las prerrogativas que a fin de cuentas serían recibidas por este concepto durante el periodo comprendido del 2013 al 2015; por ser una prerrogativa como ya se ha vertido, de rango constitucional, y al ser Movimiento Ciudadano un partido político con registro nacional y no estar contemplado dicha circunstancia en la ley, no es viable que exista pronunciamiento en contrario por parte de la autoridad electoral, en contravención de dicho derecho.

Lo anterior, es así, en atención a que un instituto político al contar con un ingreso cierto, lleva a cabo los compromisos y adquiere las obligaciones que puede afrontar con la certeza de que el financiamiento que ha de recibir obedece a su calidad de **Partido Político Nacional** y que éste se ha calculado anualmente.

Admitir lo contrario, conduciría a generar una falta de certeza para Movimiento Ciudadano y para los terceros contratantes de buena fe, dado que no existiría modo de tener por cierta la solvencia de mi representada como **Partido Político Nacional**.

Y esto es así, porque mi representada se encuentra amparada en lo previsto en los artículos 41 Bases I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 25 y 26 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; los cuales establecen que los **partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática del País, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan**, y que se reflejan, entre otros instrumentos, en su programa de acción, donde proponen precisamente políticas tendentes a resolver los problemas nacionales.

Es importante señalar, que de acuerdo a la normatividad constitucional y legal aplicable, los partidos políticos, no solo desempeñan sus funciones y tareas durante los procesos electorales (democracia procedimental), sino que realizan funciones de manera permanente a través de sus actividades ordinarias (para impulsar la democracia deliberativa) mismas que están contempladas y reguladas a través de la Constitución Federal, la normatividad de la materia, y los propios estatutos de los partidos políticos, mismos que tienen entre otras obligaciones, la de promover la participación del pueblo en la vida democrática del país.

En este tenor, como parte de estas tareas de formación de ciudadanía y fortalecimiento del régimen democrático, es que los partidos políticos tienen la obligación de corresponder a las necesidades de nuestro país, toda vez que son el instrumento por medio del cual los ciudadanos deben ejercer sus inquietudes y expresiones en el contexto de aportar un crecimiento democrático; para lo cual es precisamente a través del financiamiento que por ley les corresponde, que se allegan de los elementos necesarios para llevar a cabo el logro de sus fines establecidos constitucional y legalmente, tal y como ya se ha establecido.

A mayor abundamiento, sirve de sustento lo sostenido por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del siguiente criterio jurisprudencial que a la letra dice:

“FINANCIAMIENTO PÚBLICO, TODA AFECTACIÓN A ESTE DERECHO ES DETERMINANTE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL.- Los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 86, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prevén, como requisito de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, que los actos, resoluciones o violaciones reclamadas puedan resultar determinantes para: a) el desarrollo del proceso respectivo, o b) el resultado final de las elecciones. Una acepción gramatical del vocablo "determinante" conduce a la intelección de los preceptos constitucional y legal citados, en el sentido de que, un acto o resolución, o las violaciones que se atribuyan a éstos, son determinantes para el desarrollo de un proceso electoral o para el resultado de una elección, cuando puedan constituirse en causas o motivos suficientes para provocar o dar origen a una alteración o cambio sustancial de cualquiera de las etapas o fases del proceso comicial, o del resultado de las elecciones, consecuencia a la que también se arriba de una interpretación funcional, toda vez que el objetivo perseguido por el Poder Revisor de la Constitución, con la fijación de una normatividad básica en la Carta Magna respecto a los comicios de las entidades federativas, consistió en conseguir que todos sus procesos electorales se apeguen a un conjunto de principios fundamentales, con el objeto de garantizar el cabal cumplimiento de la previsión de la misma ley superior, de que las elecciones deben ser libres, periódicas y auténticas, propósito que no resulta necesariamente afectado con la totalidad de actos de las autoridades electorales locales, sino sólo con aquellos que puedan impedir u obstaculizar el inicio y desarrollo de próximos procesos electorales, desviar sustancialmente de su cauce los que estén en curso o influir de manera decisiva en el resultado jurídico o material de los mismos, es decir, cuando se trate de actos que tengan la posibilidad racional de causar o producir una alteración sustancial o decisiva en el desarrollo de un proceso electoral, como puede ser que uno de los contendientes obtenga una ventaja indebida; que se obstaculice, altere o impida, total o parcialmente, la realización de alguna de las etapas o de las fases que conforman el proceso electoral, como por ejemplo, el registro de candidatos, la campaña política, la jornada electoral o los cómputos respectivos; o bien, que se altere el número de posibles contendientes o las condiciones jurídicas o materiales de su participación, etcétera; de esta manera, la determinancia respecto de actos relacionados con el financiamiento público se puede producir, tanto con relación a los efectos meramente jurídicos de los actos o resoluciones de las autoridades electorales locales, emitidos antes o durante un proceso electoral, como con las consecuencias materiales a que den lugar, toda vez que en ambos puede surgir la posibilidad de que sufran alteraciones o modificaciones sustanciales las condiciones jurídicas y materiales

que son necesarias como requisito sine qua non para calificar a unas elecciones como libres y auténticas, como acontece cuando se impugna una resolución en la que se determine, fije, distribuya, reduzca o niegue financiamiento público a los partidos políticos, pues de resultar ilegales o inconstitucionales esos tipos de resoluciones, traerían como consecuencia material una afectación importante y trascendente en perjuicio de los afectados quienes tienen la calidad de protagonistas naturales en los procesos electorales, **al constituir el financiamiento público un elemento esencial para la realización del conjunto de actividades que deben y necesitan llevar a cabo los partidos políticos en su actuación ordinaria y durante los períodos electorales, así como para cumplir con la encomienda constitucional de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos, de acuerdo con los programas, principios e ideas de que postulen, y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; de manera tal que la negación o merma del financiamiento público que legalmente les corresponda, aunque sea en los años en que no hay elecciones, se puede constituir en una causa o motivo decisivo para que no puedan realizar dichas actividades o no las puedan llevar a cabo de la manera más adecuada, y esto puede traer como repercusión su debilitamiento y, en algunos casos, llevarlos hasta su extinción, lo que les impediría llegar al proceso electoral o llegar en mejores condiciones al mismo.**

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-006/2000 y acumulado.-Partidos Cardenista Coahuilense y Unidad Democrática de Coahuila.-2 de marzo de 2000.-Unanimidad de votos.

Juicios de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-023/2000 y acumulado.-Partidos Frente Cívico y Revolucionario Institucional, respectivamente.-21 de marzo de 2000.-Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-042/2000.-Partido de la Sociedad Nacionalista.-10 de mayo de 2000.-Unanimidad de votos.

La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre del año dos mil, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 12 y 13.”

Es por ello que el **Acuerdo CG/001/2013 de fecha 18 de enero de dos mil trece, mediante el cual se determina el monto del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para el año dos mil trece;** se comete en franca violación a dichos preceptos, ya que la autoridad electoral debe de regir en todo momento su actuación a la legalidad electoral, sujetándose a la realidad actual, tal y como lo ha establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la siguiente jurisprudencia, misma que establece:

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. De conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II, y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3o. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97.-Partido Acción Nacional.-5 de septiembre de 1997.-Unanimidad de votos.-

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-460/2000.-Partido Acción Nacional.-29 de diciembre de 2000.-Unanimidad de votos.-

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-009/2001.-Partido de Baja California.-26 de febrero de 2001.-Unanimidad de votos.

Nota: El contenido de los artículos 41, fracción IV, y 116, fracción IV, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados en esta jurisprudencia, corresponde respectivamente a los diversos 41, párrafo segundo, base VI, y 116, fracción IV, inciso I), del ordenamiento vigente.

La Sala Superior en sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.”

TESIS XXXVI/2012

FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA. DERECHO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES A RECIBIRLO EN EL ÁMBITO LOCAL (LEGISLACIÓN DE CAMPECHE).-De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, párrafo segundo, fracción V de la Constitución Política del Estado de Campeche; 41, párrafo primero, 70, fracciones X, XI, 89, fracción IV y 158, párrafo primero del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, se advierte que los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en las elecciones locales y, mientras esté vigente su registro ante el Instituto Federal Electoral y éste se acredite anualmente en el instituto local, a integrar el Consejo General del Instituto Estatal, lo que implica el derecho a recibir financiamiento público, entre otros, por actividades de representación política. En ese contexto, el hecho de que un partido político nacional no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación en la elección de diputados locales o no hayan contendido cuando menos en catorce distritos uninominales, no conlleva a la pérdida absoluta de sus derechos y prerrogativas, pues al integrar el Consejo General tiene el de recibir financiamiento para actividades de representación política, ya que la finalidad de éste es permitir que los partidos políticos estén representados de manera adecuada ante dicha autoridad.

Quinta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-jrc-68/2012.-Actor: Partido del Trabajo.- Autoridad responsable: Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Electoral del Poder Judicial del Estado de Campeche.-11 de abril de 2012.- Unanimidad de seis votos.- Ponente: José Alejandro Luna Ramos.- Secretarios. Adriana Fernández Martínez, Fernando Ramírez Barrios y José Artemio Roveló Garrido.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecinueve de diciembre de dos mil doce, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Pendiente de publicación.

[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Marzo de 2010; Pág. 2552

FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 72, FRACCIÓN I, INCISO F), DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN, VIOLA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AL IMPEDIR QUE SE DESTINE PARA SUFRAGAR SUELDOS, BONOS O COMPENSACIONES DE DIRECTIVOS Y/O EMPLEADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE EN LA ÚLTIMA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA NO HAYAN OBTENIDO CUANDO MENOS EL 2% DE LA VOTACIÓN EMITIDA.

El citado precepto constitucional obliga a los Poderes Legislativos de las entidades federativas a que sus Constituciones y demás disposiciones de naturaleza electoral garanticen que los partidos políticos reciban equitativamente financiamiento público para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes y solventar las tendencias a la obtención del voto durante los procesos electorales. Bajo esta premisa, el artículo 72, fracción I, inciso f), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, viola el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que los partidos políticos con derecho a recibir financiamiento público que en la última elección de diputados de mayoría relativa no hayan obtenido cuando menos el 2% de la votación emitida, no podrán destinar los recursos recibidos a sufragar sueldos, bonos o compensaciones de directivos y/o empleados. Lo anterior es así, porque el indicado precepto legal contiene una limitante para el ejercicio del financiamiento público de los partidos políticos que les impide remunerar al personal que resulta indispensable para desarrollar las funciones de los órganos políticos encaminadas a promover la participación del pueblo en la vida democrática, con lo que lejos de impulsar las actividades ordinarias permanentes a las que se refiere el citado precepto constitucional, las obstaculiza.

PLENO

Acción de inconstitucionalidad 55/2009. Partido Convergencia. 1 de octubre de 2009. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: José Francisco Castellanos Madrazo.

El Tribunal Pleno, el diecisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 26/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de marzo de dos mil diez.

[J]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012; Tomo I; Pág. 137

LA FRACCIÓN I DEL INCISO A) DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA, QUE ESTABLECEN UN ESCALONAMIENTO DE LOS PORCENTAJES POR ESE CONCEPTO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 41, BASE II, INCISO A) Y 116, FRACCIÓN IV, INCISO G) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El porcentaje para el cálculo de dicho financiamiento, contenido en el inciso a) de la base II del artículo 41 de la Constitución Federal, consistente en el producto de multiplicar el padrón electoral por el 65% del salario mínimo vigente para el Distrito Federal, no resulta obligatorio para los Estados, pues conforme al inciso g) de la fracción IV del artículo 116 de la propia Constitución, las Legislaturas Locales sólo están vinculadas a prever en sus ordenamientos legales electorales que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Consecuentemente, éstas cuentan con libertad para establecer la cuantía y los porcentajes que estimen adecuados, destinados al financiamiento público de los partidos para sufragar sus actividades ordinarias permanentes, sin que exista obligación constitucional para que el monto destinado para hacer frente a tales actividades deba mantenerse constante e invariable, sino únicamente para garantizar, como se ha señalado, que los partidos cuenten con recursos, en forma equitativa, para sufragar sus gastos fijos y para que durante los años electorales promuevan sus campañas.

PLENO

Acción de Inconstitucionalidad 58/2009 y su acumulado 59/2009. Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional. 29 de septiembre de 2009. Mayoría de ocho votos; voto contra: Sergio A. Valls Hernández. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

El Tribunal Pleno el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 108/2011 (9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de noviembre de dos mil once.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ANUAL. EL ARTÍCULO 62, PÁRRAFO 1, INCISO A), FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA, QUE DISPONE QUE EL 50% DE AQUÉL, DESTINADO PARA EL

SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SE ASIGNE DE MANERA PROPORCIONAL CONFORME A LOS RESULTADOS QUE HUBIERAN OBTENIDO EN LA ELECCIÓN INMEDIATA ANTERIOR DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL.

El artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal consagra como principio rector en materia electoral la equidad en el financiamiento público entre los partidos políticos, la cual estriba en el derecho igualitario consignado en la ley para que todos éstos realicen sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, atendiendo a sus propias circunstancias, a fin de que cada partido perciba lo que proporcionalmente le corresponda, acorde con su grado de representatividad. En ese sentido, el artículo 62, párrafo 1, inciso a), fracción II, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, al disponer que el 50% del financiamiento público anual aprobado en el presupuesto de egresos de la entidad, destinado para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, se asigne de manera proporcional conforme a los resultados obtenidos en la elección inmediata anterior de diputados de mayoría relativa, no transgrede el mencionado principio rector, ya que lo único que establece aquella porción normativa es la posibilidad de que los partidos que tengan un grado mayor de representatividad accedan a un mayor financiamiento público, y ello

sólo puede evaluarse de acuerdo a los resultados de la última elección. En todo caso, la legislatura anterior no dicta alguna orden o influye en las determinaciones de la subsecuente integración del Congreso Local, sino que el origen partidista de su integración solamente se toma como parámetro para medir la fuerza electoral de cada partido, la cual los hace distintos y, por ende, permite que se les trate en forma desigual para efectos de ministrarles el financiamiento que merecen, de acuerdo a su presencia política en el órgano legislativo para cuya integración contendieron.

PLENO

Acción de inconstitucionalidad 58/2009 y su acumulada 59/2009. Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional. 29 de septiembre de 2009. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

El Tribunal Pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 109/2011 (9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de noviembre de dos mil once.

En tales circunstancias, debe señalarse que resulta inverosímil el hecho de que la autoridad electoral pretenda restringir una prerrogativa a la que Movimiento Ciudadano tiene derecho, incumpliendo con una de sus finalidades, como lo es el de preservar el fortalecimiento del régimen de los partidos políticos, violentando la esfera jurídica de los derechos de mi representada, al restringirse el derecho de recibir el financiamiento necesario para el logro de sus fines. Lo anterior, en función de que de conformidad por lo establecido en el artículo 43 BIS fracción III del Código Electoral de la entidad, se dispone en lo que interesa lo siguiente:

“III. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DEBERÁN EXHIBIR EN EL MES DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA VIGENCIA DE SU REGISTRO Y SEÑALAR DOMICILIO LEGAL DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO, PARA GOZAR DE ESTA PRERROGATIVA A PARTIR DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE....;”

Así las cosas, es de manifestarse, que la autoridad electoral incumple con la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones Constitucionales en materia electoral; dejando de velar por los principios de Legalidad, Certeza, Imparcialidad y Objetividad, que deben regir las actividades de todo órgano Electoral ya sea administrativo o Jurisdiccional.

Por su parte debe decirse, que en la normativa electoral local, si bien se señala que a los Partidos Políticos que no alcancen el porcentaje de votación requerido del 2% les será retirado el financiamiento correspondiente; lo cierto es que no existe disposición expresa, que limite o excluya, pues no se menciona de forma expresa, tácita o implícita que los financiamientos correspondientes al mantenimiento de oficinas y el relativo a la representación del partido ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, queden anulados por el simple hecho de no haber alcanzado el porcentaje de votación ya señalado.

Máxime, que al encontrarnos acreditados ante la autoridad administrativa estatal electoral, debemos tener derecho a recibir dicho financiamiento para el sostenimiento de oficinas y gastos de representación.

En ese sentido, desde un punto de vista teleológico y pragmático es claro que este tipo de financiamiento debe entregarse a todos los partidos políticos que hayan acreditado su vigencia ante la Autoridad Estatal Electoral, puesto que acorde con lo dispuesto en el artículo 52 del Código Electoral local, el Consejo General del instituto se encuentra integrado, entre otros, por los representantes de los partidos políticos con registro,

Bajo esa perspectiva, dicho financiamiento para el sostenimiento de oficinas y gastos de representación, debe ser otorgado a cualquier partido político con registro o acreditación ante dicho Instituto Estatal

Electoral, pues ello es lo que precisamente permite, que los Institutos Políticos al tener oficinas permanentes en las entidades federativas, lleven a cabo el logro de sus fines, para los que fueron creados como entidades de interés público.

En ese sentido, si Movimiento Ciudadano presentó su constancia de la vigencia de su registro como Partido Político Nacional ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,

entonces es claro que con ello obtuvo la acreditación ante dicho organismo y, en consecuencia, tiene derecho a recibir este tipo de financiamiento.

Principios constitucionales del Derecho electoral.

A decir de Jesús Orozco Henríquez, *Los Principios Constitucionales en la materia electoral*. Es sobre este punto que muchos positivistas tradicionales (excluyentes) critican las posturas neoconstitucionalistas, al generar, según su dicho, un estado de inseguridad jurídica (sobre la previsibilidad de las decisiones judiciales) derivado **Quid iuris No. 11** Derecho Electoral mexicano y las instituciones de la democracia político-electoral que el mismo establece, no sólo permite comprender la esencia y la función de esta materia, así como el significado de los comicios y sus resultados, sino que permite contar con mayores elementos para evaluar y, en su caso, **proponer soluciones valorativa-mente satisfactorias** cuando se presenten indeterminaciones (lingüísticas o normativas) o, incluso, para buscar la transformación de las respectivas normas jurídicas positivas. Pero, en sí, ¿Qué quiere decir con esto el insigne jurista electoral? sabemos, en principio, que cuando la ley no contempla norma expresa que otorgue solución a un problema jurídico, el juzgador debe buscar respuesta precisamente en los Principios Generales del Derecho, tal y como se estatuye en diversos códigos comiciales acorde con lo dispuesto en el artículo 14 *in fine* de la Constitución Federal, de ahí que la concepción del ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no se entiende circunscrita a su enunciado de **“proponer soluciones valorativamente satisfactorias cuando se presenten indeterminaciones”**, puesto que además alude a un panorama ulterior cifrado en el enunciado de **“buscar la transformación de las normas jurídicas positivas”**. Bajo este panorama sabemos, que la respuesta a la interrogante precedente, encuentra salida entendiendo a los principios no sólo como integrantes del ordenamiento jurídico (en caso de lagunas materiales, técnicas o axiológicas si se quiere), sino incluso como instrumentos que impregnan las propias instituciones democráticas.

Principios elaborada por Jerzy Wróblewski, dentro de la cual encontramos a los principios nombre derecho, que en sí no constituyen reglas, pero que caracterizan los rasgos esenciales de las instituciones jurídicas o la línea general de regulación del derecho. Son antes que nada instrumentos de descripción del derecho en vigor. Así pues, los principios guardan un carácter performativo del orden jurídico.

Ejemplificando: el ejercicio de **prerrogativas** que conllevan un derecho fundamental, como es la libre expresión de las ideas, se encuentra impregnada. Se alude a la **racionalización**, en el sentido de justificación de los principios mediante argumentos que excluyen su derivación de entes supranaturales.

Cfr. Tesis del Pleno de la SCJN con rubro: MATERIA ELECTORAL. PARA EL ANÁLISIS DE LAS LEYES RELATIVAS ES PERTINENTE ACUDIR A LOS PRINCIPIOS RECTORES Y VALORES DEMOCRÁTICOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, visible en la página 646 del Tomo XXIII de abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.49.

SEXTO.- A los argumentos de inconformidad expresados por el Partido Político Movimiento Ciudadano, dieron contestación los Partidos: Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional y Acción Nacional, en los siguientes términos:

I.- El Partido Verde Ecologista de México, expuso:

I. ANTECEDENTES.

1.- El día 18 de enero de 2013, fue aprobado el Acuerdo CG/001/2013 determinando el monto de financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para el año 2013, entre los que se encuentra Instituto Político que represento con la cantidad de \$5'757,958047

(Cinco Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos 47/100 Moneda Nacional).

2.- Inconforme con la resolución en mención el Partido Político denominado Movimiento Ciudadano interpuso recurso de revisión en contra del Acuerdo en cita en términos de los artículos 298, 299 y demás relativos y aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

II. INTERÉS JURÍDICO.

El Partido Verde Ecologista de México, tiene interés jurídico en el presente recurso de revisión por las razones siguientes:

1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 43 bis fracción I de la ley Comicial del Estado, el financiamiento público será calculado anualmente considerando la totalidad de los partidos políticos con registro, distribuyendo entre los partidos políticos con derecho al financiamiento el 35% del monto total en partes iguales y el 65% en proporción igual a la representada por el número de votos logrados en la contienda electoral que anteceda a la distribución para la elección de diputados locales, y si existiere remanente en la distribución del financiamiento se destinará al fortalecimiento del régimen de partidos políticos distribuyéndose en la misma forma antes mencionada.

2.- De verse modificada la resolución contenida en el Acuerdo CG/001/2013 concediéndose la razón al Partido Político que impugna por fuerza se verían modificadas las cantidades correspondientes a cada uno de los Partidos Políticos que sí tienen registro en el Estado, por lo que el Partido Verde Ecologista de México, siendo uno de aquellos Partidos que sí tienen registro a nivel estatal, tiene plenamente acreditado su interés en que en el presente recurso de revisión se cumplan con estricto apego a los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. Y que lo mismo suceda con los principios rectores de la función electoral, esto es que las autoridades electorales y en el caso, de manera particular por los órganos jurisdiccionales ciñan su actuar a los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.

II. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.

En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción II del artículo 325 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, por haberse consentido el acto impugnado, ya que el acuerdo CG/001/2013 hoy impugnado está relacionado con el acuerdo CG/143/2012 aprobado en sesión ordinaria de fecha 30 de agosto de 2012 mediante el cual se emite la declaratoria relativo a los partidos políticos acreditados que **tendrán el derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince,** sin que dicho acuerdo haya sido impugnado por el Partido Político Movimiento Ciudadano dentro del plazo señalado para tal efecto mediante los recursos a su alcance en términos de la ley electoral local y en su caso las leyes electorales en materia federal.

En efecto, si bien es cierto que la determinación del monto del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos para el año 2013 y la forma en que el mismo será distribuido es por conducto del acuerdo impugnado, la resolución relativa a cuáles Partidos Políticos tendrían derecho al financiamiento público es de fecha 30 de agosto de 2012, y dicha resolución no fue combatida en tiempo y forma conforme a la ley comicial estatal por Movimiento Ciudadano, razón por la cual se entiende consentida tácitamente.

El acuerdo CG/001/2013 que hoy se impugna no es más que el cálculo conforme a las fórmulas previstas en ley de la distribución de los montos de financiamiento público entre los Partido Político que el Consejo General del Instituto Electoral Estatal considera con derecho a recibir dicho financiamiento en términos del acuerdo previo CG/143/2012, acuerdo este último que no fue recurrido en su momento por Movimiento Ciudadano.

Ahora bien, para el caso de que esa Sala decida entrar al estudio del fondo del asunto se hacen valer las siguientes consideraciones.

IV. LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.

La legalidad del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato deriva de que, conforme a lo previsto por el párrafo sexto del artículo 17 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, para que un Partido Político Nacional tenga derecho recibir financiamiento público, **deberá haber conservado su acreditación y**

obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de Diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa.

El mismo artículo 17 en cita, en su párrafo cuarto determina que el financiamiento público para los Partidos Políticos que **mantengan su registro o acreditación después de cada elección** se compondrá **de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.** las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico.

Al respecto, el artículo 40 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato prevé que para tener derecho a recibir financiamiento público el Partido Político de que se trate deberá haber conservado su registro y **obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de Diputados al congreso del estado bajo el principio de mayoría relativa.**

En el caso a estudio, Movimiento Ciudadano no obtuvo cuando menos el 2% de la votación válida estatal de Diputados al Congreso del Estado, pues conforme al cómputo estatal definitivo realizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mismo que obra en el acuerdo CG/143/2012, el Partido Político en cita alcanzó el 1.5040% de la votación válidamente emitida para la elección de diputados por el principio de representación proporcional.

Razón por la cual en términos de los numerales antes mencionados, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en estricto apego a derecho y a la legalidad, resuelve no considerar a Movimiento Ciudadano para hacer la distribución del financiamiento público de los Partidos Políticos durante el año 2013.

V. IMPROCEDENCIA DE LOS AGRAVIOS

RESPECTO DEL AGRAVIO PRIMERO. Resulta a todas luces infundado e improcedente que el recurrente se duela de una presunta violación a su derecho de recibir en forma equitativa financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, y es falso que la Autoridad Responsable pretenda despojar a Movimiento Ciudadano de su derecho a recibir financiamiento público, puesto que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por conducto de su Consejo General únicamente cumple con las disposiciones de la ley electoral local.

Los argumentos respecto a los compromisos y obligaciones que como partido se hayan obtenido no son óbice para considerar lo anterior, pues es a todas luces un hecho notorio y ampliamente conocido que la determinación del monto de financiamiento público y la distribución del mismo se hace anualmente y por ejercicio fiscal. De igual forma debe considerarse que los Partidos Políticos tienen la potestad de contar con un financiamiento particular para hacer frente a sus comportamientos y obligaciones.

Incluso la jurisprudencia que se menciona por parte de Movimiento Ciudadano no es suficiente para variar el sentido de la determinación, puesto que se refiere a que el Partido Político que no haya obtenido el dos por ciento de la votación en la elección de diputados locales no implica que pierda el derecho de recibir financiamiento para actividades de representación política, lo que no necesariamente implica tener financiamiento público en términos del artículo 17 de la Constitución local, ya que el financiamiento público se refiere a las ministraciones **destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.** no a las actividades de representación política.

II.- Por su parte el Partido Revolucionario Institucional alegó:

I. ANTECEDENTES.

1.- Que con fecha 30 de agosto de dos mil doce, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en sesión ordinaria "emitió la declaratoria relativa a los partidos políticos acreditados que tendrán derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince, por haber obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en la elección ordinaria de dos mil doce".

Asimismo en el susodicho acuerdo "se señaló que los institutos políticos Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, tendrán derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince, al haber obtenido más del dos por ciento de la

votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en la elección ordinaria del dos mil doce”.

Por último y en lo que interesa, en el acuerdo en mención “se determinó que los institutos políticos Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano no tendrán derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince, ya que no alcanzaron el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en la elección ordinaria del dos mil doce”.

2.- Que con fecha 18 de enero de dos mil trece, fue aprobado el Acuerdo CG/001/2013 mediante el cual se determina el monto del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para el año dos mil trece.

3.- El Partido Movimiento Ciudadano por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, ha presentado un supuesto recurso de revisión y en el que plantea lo que afirma son agravios, así en plural; cuando en realidad solo es una misma alegación pero reiterada, que su instituto político es un partido político nacional, que ya no tendrá acceso al financiamiento público.

4.- Mediante proveído del 7 de febrero del año en curso se radicó el medio de impugnación, registrándose bajo el número de expediente 01/2013-IV en la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, lo cual fue notificado al Partido Revolucionario Institucional en su carácter de tercero interesado el día 8 de febrero del año en curso, también para los efectos del caso.

II. EL RECURRENTE IMPUGNA EL ACTOS CONSISTENTE EN:

1.- “La aprobación del Acuerdo CG/001/2013 de fecha 18 de enero de dos mil trece, mediante el cual se determina el monto del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para el año dos mil trece.

III. PRECEPTOS LEGALES QUE EL RECURRENTE CONSIDERA VIOLADOS EN SU PERJUICIO.

Aduce el recurrente que la autoridad responsable viola en perjuicio del Partido Movimiento Ciudadano lo dispuesto por los artículos 14, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 25 y 26 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 43 Bis fracción III y 52 del Código Electoral Local.

IV.- LEGALIDAD DEL ACUERDO EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

En los términos del artículo 327 del Código de Instituciones y procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, el acuerdo número CG/001/2013 de fecha 18 de enero del año 2013, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se determina el monto del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos (acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para el año dos mil trece), es legal por las razones siguientes:

1.- Se encuentra apegado a derecho, colmando lo señalado por los artículos 17 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 26, 39 bis 3, 40 fracción II párrafo segundo, 43 bis fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y cumpliendo plenamente con los principios de adecuada motivación y fundamentación ya que de la vista y lectura del citado acuerdo aprobado por unanimidad en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, se desprende con claridad meridiana que en el mismo se expresaron diversas consideraciones, explicando también de manera suficiente los motivos de su decisión, indicando de igual manera los fundamentos legales que sirvieron de apoyo para sustentar su criterio.

En efecto, es de explorado derecho que los conceptos de fundamentación y motivación implican la protección de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna y que en tal contexto, por fundamentación debe entenderse como la invocación de la autoridad en cuanto cita los preceptos legales sustantivos y objetivos en los que apoya una determinación adoptada y por motivación, como la expresión hecha por la autoridad de una serie de razonamientos lógicos-jurídicos sobre el porqué consideró que en el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. En este sentido se pronuncia el cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Distrito en la tesis cuyo registro es el número 209986, bajo el rubro “**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE**”.

Consecuentemente debe confirmarse el acuerdo impugnado, habida cuenta de que la autoridad responsable sí se ajustó a los principios de legalidad, certeza y exhaustividad, que rigen en todo estado social y democrático de derecho.

V. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO Y AGRAVIOS.

I. Causas de improcedencia.

En el presente caso se surte claramente una causa de improcedencia que debe ser estudiada por la Sala a efecto de que se declare la improcedencia del recurso intentado.

En efecto, en el caso el tema neurálgico se contrae a que el partido político inconforme se duele de que en virtud a que no alcanzó el dos por ciento de la votación exigida, pretende que el Tribunal Electoral le reconozca el derecho a efecto de que se le asigne financiamiento público, tan sólo por tratarse de un partido con registro nacional.

Sin embargo es necesario destacar a la Sala que, el tema de la declaración sobre qué partidos tenían derecho a recibir financiamiento público en términos de lo dispuesto por el artículo 17 sexto párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en correlación con los numerales 40 fracción II y 43 Bis fracción VIII del Código de Instituciones y Procedimientos electorales local, fue abordado como correspondía, en el acuerdo CG/143/2102 de fecha treinta de agosto de dos mil doce.

En el acuerdo de referencia, que fue aprobado por el Consejo General y en cuya sesión estuvo presente el representante del partido político Movimiento Ciudadano y que a continuación se transcribe, establece:

“En la sesión ordinaria efectuada el treinta de agosto de dos mil doce, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente:

Acuerdo mediante el cual se emite la declaratoria relativa a los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que tendrán derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince, por haber obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en la elección ordinaria de dos mil doce.

RESULTANDO:

PRIMERO. Que el nueve de enero de dos mil doce, se instaló el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Asimismo, con fundamento en el artículo 16 del código electoral local, en la sesión ordinaria del veinticuatro de febrero del presente año, el Consejo General aprobó la convocatoria a elecciones ordinarias para Gobernador del Estado, diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa y representación proporcional y la renovación de los cuarenta y seis ayuntamientos, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado número 38, tercera parte, de fecha seis de marzo de dos mil doce.

SEGUNDO. Que en la sesión ordinaria del nueve de enero de dos mil doce, mediante acuerdo CG/001/2012, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 16, segunda parte, de fecha veintisiete de enero del mismo año, el Consejo General aprobó el monto de financiamiento público a que tienen derecho para el año dos mil doce los partidos políticos con registro y acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

TERCERO. Que en la sesión ordinaria del veinticuatro de febrero de dos mil doce, mediante acuerdo CG/011/2012, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 38, tercera parte, de fecha seis de marzo del mismo año, el Consejo General interpretó disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato referentes a las coaliciones, y se fijaron criterios.

CUARTO. Que en las sesiones extraordinarias del cuatro de julio de dos mil doce, los veintidós consejos distritales electorales efectuaron los 2 cómputos distritales de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de la ley electoral local.

QUINTO. Que el veinte de julio de dos mil doce, la Tercera Sala

Unitaria del Tribunal Electoral del Estado dictó resolución en el expediente electoral 25/2012-III, notificada al Instituto el mismo día, en la que se confirmó la sesión de cómputo distrital llevada a cabo el cuatro de julio de dos mil doce por el Consejo Distrital Electoral V, con cabecera en León, Guanajuato, atinente a la elección de diputado local por mayoría relativa, en la que resultó ganadora la fórmula postulada por la coalición denominada “Compromiso por Guanajuato”, integrada por Jorge Arena Elizondo como diputado propietario y Juan Manuel Arroyo Fuentes como diputado suplente. Asimismo, se declaró la nulidad de los votos recibidos a favor de los partidos políticos contendientes respecto de las casillas 1465 básica, 1477 contigua 8, 1490 contigua 9, 1494 contigua 6, 1844 básica y 1851 contigua

SEXTO. Que el veintisiete de julio de dos mil doce, la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado, dictó resolución en el expediente electoral 24/2012-II, notificada al Instituto el mismo día, en la que se confirmó la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, realizada por el Consejo Distrital Electoral VI, con cabecera en León, Guanajuato, y la expedición de la constancia de mayoría y validez, a favor de la fórmula de candidatos postulada por la coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, integrada por Roberto Mauricio Vallejo Rábago y Roger Christian James Albo, como propietario y suplente, respectivamente.

Asimismo, se decretó la nulidad de la votación recibida en las casillas 1608 contigua 1 y 1672 contigua 2, y se determinó adicionar al Partido Acción Nacional la cantidad de diez votos respecto a la casilla 1637 básica, ya que al momento de efectuar el cómputo distrital se sumaron solamente 161 votos en favor del instituto político mencionado, siendo que lo correcto son 171 votos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 31, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política local, y 46 del código comicial vigente en la entidad, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es un órgano público, autónomo, dotado de independencia funcional, de carácter 3 permanente, con personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria, al que corresponde el ejercicio de la función estatal de organizar los procesos electorales. Dicha función estatal se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, definitividad, equidad, objetividad y profesionalismo.

SEGUNDO. Que el artículo 51 del código electoral local, señala que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al que corresponde la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.

TERCERO. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 17, párrafo sexto, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, para que un partido político nacional tenga derecho a recibir financiamiento público, deberá haber conservado su acreditación y obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, lo cual deberá ser declarado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión que siga a la calificación de la elección.

Asimismo, el artículo 40, fracción II, párrafo segundo, de la ley electoral local, establece que para que un partido político tenga derecho a recibir financiamiento público, deberá haber conservado su registro o acreditación y obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, lo cual deberá ser declarado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión que siga a la calificación de la elección.

CUARTO. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 43 bis, fracción VIII, del código electoral local, el partido político que no alcance el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, no tendrá derecho al financiamiento público para las siguientes anualidades. Tampoco tendrá derecho a recibir las aportaciones bimestrales que sigan a la fecha de la resolución en que se declare la pérdida del registro, dentro del año que corra.

QUINTO. Que en el punto primero, numeral 5, del acuerdo a que se hace referencia en el resultando tercero del presente acuerdo, se precisó que cuando en las boletas electorales se marquen dos o más emblemas de partidos políticos integrantes de una coalición, el voto contará para el candidato pero no para los partidos políticos. 4

SEXTO. Que el resultado del cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, en cada uno de los veintidós distritos electorales fue el siguiente:

| | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|----|--|--|--|
| Distrito electoral | | | | | | | | | |
| PAN PRI PRD PT PVEM MC NA | | | | | | | | | |
| Coalición PRI-PVEM | | | | | | | | | |
| (votos múltiples) | | | | | | | | | |
| Candidatos no registrados | | | | | | | | | |
| Votos nulos | | | | | | | | | |
| I de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 36,220 | | | | | | | | | |
| 32,044 | 4,623 | 1,714 | 3,412 | 557 | 2,594 | 78 | | | |
| 7,941 | | | | | | | | | |
| II de San Luis de la Paz 40,344 | | | | | | | | | |
| 33,273 | 8,523 | 4,040 | 9,329 | | | | | | |
| 2,412 | 6,182 | 99 | 9,308 | | | | | | |
| III de León | | | | | | | | | |
| 50,314 | 32,922 | 3,394 | 964 | 4,769 | 964 | | | | |
| 2,125 | 4,637 | 89 | 5,674 | | | | | | |
| IV de León 64,642 | | | | | | | | | |
| 51,114 | 4,971 | 1,864 | 6,909 | 1,388 | | | | | |
| 3,899,500 | 162 | 7,227 | | | | | | | |
| V de León 47,588 | | | | | | | | | |
| 38,678 | 3,287 | 1,043 | 5,188 | 883 | | | | | |
| 2,549 | 7,134 | 113 | 5,126 | | | | | | |
| VI de León 38,379 | | | | | | | | | |
| 29,478 | 3,020 | 896 | 3,945 | 675 | | | | | |
| 2,089 | 5,401 | 65 | 4,124 | | | | | | |
| VII de León 54,948 | | | | | | | | | |
| 41,041 | 4,656 | 1,474 | 5,902 | 914 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 3,757 | 7,293 | | 116 | 5,966 | | | | |
| VIII de Guanajuato | 36,007 | | 42,024 | 7,161 | 1,910 | 9,617 | | |
| 1,233 | 3,140 | | 177 | 9,210 | | | | |
| IX de San Miguel de Allende | 36,310 | | 31,302 | 5,941 | 1,994 | | | |
| 4,868 | 1,381 | 2,911 | 76 | 9,282 | | | | |
| X de San Francisco del Rincón | | | | 54,700 | 42,619 | 7,012 | 1,018 | |
| 4,897 | 613 | 3,300 | 58 | 10,251 | | | | |
| XI de Irapuato | 44,891 | | 40,154 | 4,497 | 1,561 | 3,056 | 1,087 | |
| 2,447 | 128 | 9,278 | | | | | | |
| XII de Irapuato | 42,691 | | 38,748 | 4,098 | 1,284 | 2,750 | 1,038 | |
| 3,014 | 75 | 8,928 | | | | | | |
| XIII de Salamanca | 48,726 | | 29,859 | 5,846 | 1,670 | 6,257 | | |
| 1,397 | 4,121 | 50 | 8,006 | | | | | |
| XIV de Salamanca | 42,740 | | 26,806 | 5,404 | 1,581 | 4,716 | | |
| 1,209 | 2,605 | | 46 | 6,593 | | | | |
| XV de Celaya | 46,934 | | 30,353 | 9,753 | 2,715 | 7,055 | 1,749 | |
| 5,379 | 4,386 | 134 | 6,397 | | | | | |
| XVI de Celaya | 45,550 | | 33,939 | 7,707 | 2,321 | 4,320 | 1,558 | |
| 3,016 | 5,268 | 85 | 5,900 | | | | | |
| XVII de Apaseo el Grande | | | 41,561 | 26,926 | 7,759 | 1,852 | | |
| 7,078 | 8,054 | 4,645 | | 46 | 10,048 | | | |
| XVIII de Pénjamo | 38,584 | | 35,464 | 7,515 | 2,039 | 2,458 | | |
| 291 | 1,496 | 48 | 8,809 | | | | | |
| XIX de Valle de Santiago | | | 30,402 | 10,006 | 22,577 | 2,240 | 9,287 | |
| 1,229 | 5,880 | 54 | 6,542 | | | | | |
| XX de Yuriria | 31,104 | | 20,888 | 6,175 | 3,605 | 14,879 | 915 | |
| 2,158 | | 65 | 6,017 | | | | | |
| XXI de Salvatierra | 37,985 | | 24,612 | 7,799 | 1,241 | 3,371 | | |
| 618 | 2,974 | 61 | 6,762 | | | | | |
| XXII de Acámbaro | 28,689 | | 18,677 | 17,231 | 1,479 | 2,732 | | |
| 1,067 | 1,713 | 57 | 7,860 | | | | | |
| Votación total | | | | | | | | |
| 939,309 | 710,927 | 158,949 | 40,505 | 126,795 | 31,232 | 71,990 | 43,619 | 1,882 |
| 165,249 | 5 | | | | | | | |

SÉPTIMO. Que de acuerdo a lo señalado en los resultandos quinto y sexto del presente acuerdo, la votación total anulada en las casillas 1465 básica, 1477 contigua 8, 1490 contigua 9, 1494 contigua 6, 1844 básica y 1851 contigua 1, 1608 contigua 1 y 1672 contigua 2, es la siguiente:

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|
| Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC NA | | | | | | | | | |
| Coalición PRI-PVEM | | | | | | | | | |
| (Votos múltiples) | | | | | | | | | |
| Candidatos no registrados | | | | | | | | | |
| Votos nulos | | | | | | | | | |
| 1465-B | 99 | 143 | 3 | 5 | 11 | 3 | 9 | 33 | 0 |
| 13 | | | | | | | | | |
| 1477-C | 8 | 168 | 144 | 13 | 4 | 14 | 2 | 13 | 28 |
| 0 | 10 | | | | | | | | |
| 1490-C | 9 | 144 | 112 | 14 | 2 | 20 | 2 | 8 | 25 |
| 0 | 13 | | | | | | | | |
| 1494-C | 6 | 98 | 131 | 4 | 2 | 17 | 2 | 10 | 47 |
| 0 | 22 | | | | | | | | |
| 1844-B | 114 | 105 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 17 | |
| 0 | 9 | | | | | | | | |
| 1851-C | 1 | 178 | 141 | 9 | 4 | 18 | 6 | 11 | 34 |
| 1 | 14 | | | | | | | | |
| 1608-C | 1 | 143 | 130 | 7 | 4 | 17 | 7 | 10 | 24 |
| 0 | 17 | | | | | | | | |
| 1672-C | 2 | 156 | 146 | 12 | 5 | 25 | 2 | 9 | 26 |
| 0 | 14 | | | | | | | | |
| Votación total | | | | | | | | | |
| 1,100 | 1,052 | 64 | 27 | 130 | 26 | 70 | 234 | 1 | |
| 112 | | | | | | | | | |

OCTAVO. Que a la votación referida en el considerando sexto de este acuerdo (correspondiente a los resultados de las sesiones de cómputos distritales para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa), deben restarse los votos anulados que han sido

precisados en el considerando que antecede, además de sumarse diez votos al Partido Acción Nacional —de conformidad con lo determinado por la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado, en el expediente electoral 24/2012-II—, como se muestra en la siguiente tabla:

| Partido político | | | |
|--|-------------------|---------|---------|
| Votación total de cómputos distritales de diputados por el principio de mayoría relativa | | | |
| Votación anulada | Votos adicionados | Total | |
| PAN 939,309 | 1,100 | 10 | 938,219 |
| PRI 710,927 | 1,052 | | 709,875 |
| PRD 158,949 | 64 | 158,885 | |
| PT 40,505 | 27 | 40,478 | |
| PVEM 126,795 | 130 | 126,665 | |
| MC 31,232 | 26 | 31,206 | |
| NA 71,990 | 70 | 71,920 | |
| Coalición PRI-PVEM (votos en ambos emblemas) | | | |
| 43,619 | 234 | 43,385 | |
| Candidatos no registrados | 1,882 | 1 | 1,881 |
| Votos nulos | 165,249 | 112 | 165,137 |

NOVENO. Que acorde a lo precisado en el considerando que antecede, la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa queda integrada de la siguiente manera:

| Partido político | Votación válida estatal | Porcentaje |
|--|-------------------------|------------|
| PAN | 938,219 | 45.1664% |
| PRI | 709,875 | 34.1738% |
| PRD | 158,885 | 7.6488% |
| PT | 40,478 | 1.9486% |
| PVEM | 126,665 | 6.0977% |
| Movimiento Ciudadano | 31,206 | 1.5023% |
| Nueva Alianza | 71,920 | 3.4623% |
| Votos válidos | 2'077,248 | 100% |
| Candidatos no registrados | 1,881 | |
| Votos nulos | 165,137 | |
| Coalición PRI-PVEM (distritos III al VII de León, XV y XVI de Celaya) —votos en ambos emblemas— | | |
| 43,385 | | |
| Votación total | 2'287,651 | |

El total de la votación válida estatal se obtiene restando de la votación total emitida, los votos a favor de candidatos no registrados y los votos nulos, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del código comicial local. Asimismo, debe precisarse que de acuerdo a lo señalado en el punto primero, numeral 5, del acuerdo CG/011/2012, aprobado por este Consejo General en sesión ordinaria celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil doce, cuando en las boletas electorales se marquen dos o más emblemas de partidos políticos integrantes de una coalición, el voto contará para el candidato pero no para los partidos políticos, por lo que para los efectos de este acuerdo, los votos en tal forma emitidos se consideran nulos.

DÉCIMO. Que la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, obtenida por los institutos políticos Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, así como su porcentaje de votación, son los siguientes:

| Partido político | Votación válida estatal | Porcentaje |
|----------------------|-------------------------|------------|
| PT | 40,478 | 1.9486% |
| Movimiento Ciudadano | 31,206 | 1.5023% 7 |

Partiendo de lo anterior, se declara que los institutos políticos Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano no tendrán derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 17, párrafo sexto, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 40,

fracción II, párrafo segundo, y 43 bis, fracción VIII, del código electoral local, pues no alcanzaron el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa.

Por otro lado, se declara que los institutos políticos Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, sí tendrán derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince, ya que obtuvieron más del dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, tal y como se desprende de los datos plasmados en el considerando noveno del presente acuerdo.

UNDÉCIMO. Que en lo concerniente a las restantes ministraciones bimestrales (septiembre-octubre y noviembre-diciembre) del financiamiento público correspondiente al año dos mil doce de Movimiento Ciudadano, es necesario realizar las siguientes precisiones.

El párrafo sexto del artículo 17 de la Constitución Política local, establece que para que un partido político nacional tenga derecho a recibir financiamiento público, deberá haber conservado su acreditación y obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, lo cual deberá ser declarado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión que siga a la calificación de la elección.

Asimismo, en el segundo párrafo de la fracción II, del artículo 40 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se estipula que para que un partido político tenga derecho a recibir financiamiento público, deberá haber conservado su registro o acreditación y obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, lo cual deberá ser declarado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión que siga a la calificación de la elección.

De las normas aludidas se desprende claramente que los partidos políticos nacionales que conserven su acreditación, solo podrán recibir financiamiento público si obtuvieron cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa.

Dichas normas, sin embargo, no precisan si debe suspenderse el financiamiento público a un partido político nacional que lo venía recibiendo, pero que en el presente proceso electoral no alcanzó el porcentaje referido.

De entrada, debe decirse que ni en la Constitución Política local ni en el código comicial local, se establece en forma expresa que en tales casos el financiamiento público deba suspenderse.

En la fracción I del artículo 43 bis, del código electoral del Estado, se establece que el financiamiento público será calculado anualmente, considerando la totalidad de los partidos políticos con registro en términos del propio código, y que se distribuirá entre los partidos políticos que tengan derecho al financiamiento el treinta y cinco por ciento del monto total en partes iguales, y el sesenta y cinco por ciento restante se distribuirá en proporción igual a la que represente el número de votos logrados en la anterior contienda electoral de diputados locales.

La fracción IV del artículo precitado, establece que los partidos políticos recibirán el financiamiento público bimestralmente, conforme al calendario que apruebe el Consejo General del Instituto. Sobre este particular, en la fracción VI del artículo 63 de la ley electoral local, se establece como atribución del Consejo General, la relativa a determinar conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 43 bis del propio código, el monto del financiamiento público a que tendrán derecho los partidos políticos y acordar el calendario para la ministración de dicho financiamiento.

Asimismo, en la fracción VIII del referido artículo 43 bis del código comicial local, se estipula que el partido político que no alcance el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, no tendrá derecho al financiamiento público para las siguientes anualidades, y que tampoco tendrá derecho a recibir las aportaciones bimestrales que sigan a la fecha de la resolución en que se declare la pérdida del registro, dentro del año que corra.

De la interpretación gramatical y sistemática de las normas aludidas, se desprende que el financiamiento público se otorga anualmente a los partidos políticos con derecho a ello, y que el mismo debe serles entregado bimestralmente. Asimismo, de la interpretación gramatical

de la disposición contenida en la fracción VIII del artículo 43 bis del código electoral local, en el sentido de que el partido político que no alcance el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, no tendrá derecho al financiamiento público para las siguientes anualidades, se desprende que el derecho a recibir financiamiento se pierde a partir del siguiente año.

Por otro lado, debe considerarse que mediante el acuerdo CG/001/2012, del nueve de enero de dos mil doce, el Consejo General determinó el monto del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para el año dos mil doce. En dicho acuerdo se estableció el monto del financiamiento público al que tuvieron derecho los partidos políticos para el año dos mil doce, es decir, el monto se calculó de manera anual, sin que se hubiera establecido alguna limitante o condición para aquellos que no alcanzaran el dos por ciento de la votación válida para diputados de mayoría relativa en el presente proceso electoral.

Al respecto debe destacarse que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha señalado que el financiamiento que le es asignado a un partido político al inicio de un ejercicio fiscal, constituye una prerrogativa que es calculada atendiendo a la votación obtenida conforme a la elección inmediata anterior y le es otorgada de forma anual, siendo una cuestión aparte el que la entrega del financiamiento se haga mediante ministraciones bimestrales, pues ello solo es para que las prerrogativas del partido político se distribuyan durante todo un año, por lo que cuando a un partido político le ha sido otorgado un monto cierto como prerrogativa de financiamiento público por un año, atendiendo a la votación y representación obtenida en el proceso electoral anterior, el monto ya determinado no puede verse afectado por el hecho de haber perdido su registro, pues ello solo surtirá efectos hasta que el órgano electoral formule la distribución del financiamiento público para el siguiente año.

Atendiendo a las anteriores consideraciones, se puede concluir que los partidos políticos nacionales que vienen recibiendo financiamiento público durante el presente año, y que en el proceso electoral actual no alcanzaron el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, pero conservaron su acreditación, pierden el derecho de recibir financiamiento público para las siguientes anualidades, es decir, para los años dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, al menos, pero conservan su derecho a recibir la parte correspondiente del financiamiento público que les fue otorgado para el año dos mil doce, por lo que este Consejo General determina que Movimiento Ciudadano recibirá las restantes ministraciones bimestrales del financiamiento público correspondiente al año dos mil doce.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y 40, fracción II, párrafo segundo, 43 bis, fracción VIII, 46 y 51, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se somete a la consideración del Consejo General, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Los institutos políticos Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, tendrán derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince, al haber obtenido más del dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en la elección ordinaria de dos mil doce.

SEGUNDO. Los institutos políticos Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano no tendrán derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince, ya que no alcanzaron el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en la elección ordinaria de dos mil doce.

TERCERO. Por los motivos expuestos en el considerando undécimo de este acuerdo, Movimiento Ciudadano recibirá las restantes ministraciones bimestrales del financiamiento público correspondiente al año dos mil doce.

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Notifíquese por estrados.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 64, fracción III, y 65, fracción III, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, firman este acuerdo el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Secretario del mismo.”

Es pues factible advertir que precisamente en ese momento procesal el Consejo se pronunció respecto de la declaratoria de los partidos que recibieron cuando menos el dos por ciento del total de la votación emitida válidamente. En esa resolución de manera clara y expresa se determinó que el partido Movimiento Ciudadano no había alcanzado el dos por ciento de la votación y que consecuentemente no tenía derecho a recibir financiamiento como prerrogativa pública.

Ese acuerdo del Consejo General de fecha 30 de agosto de 2012 no fue combatido por los afectados, entre ellos el partido Movimiento Ciudadano. Justamente ese acuerdo era el que debió de haberse impugnado y no el de ahora que tan solo ejecuta y materializa el acuerdo de 30 de agosto. Esto es el Acuerdo señalado en primer término, por las razones apuntadas fue quien dejó fuera del financiamiento público al Movimiento Ciudadano, como al partido del Trabajo, mientras que el otro (Acuerdo) CG/001/2013 indebidamente recurrido, nada más determinó el monto a que por concepto de financiamiento público tendrán derecho los partidos políticos para el año dos mil trece merced a la declaratoria que con antelación se había realizado por el Consejo general. Al no haber recurrido se entiende que tácitamente se admitió el acto.

En las circunstancias apuntadas, bien vale decir que en la especie se presenta de manera por demás evidente una causa de improcedencia que obliga a la autoridad jurisdiccional electoral, a desechar de plano por notoriamente improcedente la revisión planteada por el representante del partido Movimiento Ciudadano, al no haber impugnado en el término previsto para tal efecto el acuerdo CG/143/2012, lo que a no dudar implicó que lo consintió de manera tácita. Causas de improcedencia contenidas en la fracciones II y VI del artículo 325 del Código Electoral.

Diversa causa de improcedencia y que también trae aparejado el sobreseimiento del asunto, consistente en el hecho de que en el caso no existe una lesión jurídica o agravio para los intereses del partido político impugnante. Causal de improcedencia prevista en el artículo 325, fracción III del Código Comicial local.

II. Ahora bien y Ad-Cautelam, en otro orden de ideas, vale apuntar que el primero y único agravio que invoca el recurrente en realidad no contiene argumentos mediante los que contradiga la resolución o acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato.

Lo anterior es así porque no dice en qué consiste la supuesta violación a su derecho ni mucho menos que parte del acuerdo recurrido es el que le irroga agravio. Y es que no lo indica porque en realidad en este acuerdo que ahora se impugna, es decir el de fecha 18 de enero de 2013, no se quita ni desconoce derecho alguno del partido inconforme.

Suponiendo sin admitir, que no le hubiera precluido el derecho para impugnar al partido inconforme, y que en el acuerdo que ahora combate tardíamente estableciera apenas la declaración de que partidos tienen derecho a la financiación pública; si se debe señalar que no basta ser un partido nacional para recibir por esa sola circunstancia financiamiento público; sino que es menester que se cumpla con los requisitos que se establecen en la propia Constitución, tanto federal como local, para colocarse en el supuesto de adquirir un derecho público de financiamiento.

Tales requisitos son de orden constitucional y legal.

En efecto el artículo 17 de la Constitución para el Estado de Guanajuato señala:

Los Partidos Políticos son entidades de interés público y tienen como fin primordial promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del Poder Público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Para ello tendrán el derecho exclusivo de postular candidatos por sí mismos o a través de coaliciones en los términos que establezca la Ley de la materia.

Sólo los ciudadanos guanajuatenses podrán formar partidos políticos estatales y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El Estado garantizará que los Partidos Políticos cuenten, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para el desarrollo de sus actividades. La Ley determinará las formas específicas de su intervención en los procesos electorales, sus derechos, prerrogativas, formas y reglas de financiamiento, los topes y bases a sus gastos de precampaña y de campaña, así como el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes.

El financiamiento público para los Partidos Políticos que mantengan su registro o acreditación después de cada elección se compondrá de las ministraciones destinadas al

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico.

Para que un Partido Político Estatal conserve su registro, reciba financiamiento y goce de los derechos y las prerrogativas que esta Constitución y la Ley le conceda, deberá obtener el dos por ciento de la votación válida estatal de Diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, lo cual deberá ser declarado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión que siga a la calificación de la elección.

Para que un Partido Político Nacional tenga derecho recibir financiamiento público, deberá haber conservado su acreditación y obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de Diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, lo cual deberá ser declarado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión que siga a la calificación de la elección.

Los Partidos Políticos deberán rendir informes justificados sobre el origen y uso de todos los recursos con que cuenten, para efectos de la fiscalización a que se refiere el artículo 31 de esta Constitución, en los términos de la Ley de la materia. Dichos informes serán públicos.

La Ley fijará los criterios para establecer los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia Ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

La Ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. La duración de las campañas en el año de elecciones para Gobernador no durarán más de setenta y cinco días, las campañas para elegir Diputados al Congreso no durarán más de cuarenta y cinco días y las campaña para elegir ayuntamientos no durarán más de sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales. La violación a estas disposiciones por los Partidos o cualquier otra persona física o moral será sancionada conforme a la Ley.

Los Partidos Políticos accederán a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los Partidos Políticos en los términos que señalen esta Constitución y la Ley de la materia.

En consonancia con la anterior disposición constitucional, que es la base para determinar qué partido tienen la oportunidad de obtener recurso económicos públicos destinados precisamente a los partidos políticos, es necesario atender a lo dispuesto por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales Estatal, por cuanto indica:

El artículo 40 de dicha codificación establece:

SON PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS:

I. TENER ACCESO A LA RADIO Y LA TELEVISIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL APARTADO B DE LA BASE III DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;

II. RECIBIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE MANERA EQUITATIVA Y PROPORCIONAL PARA SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES. PARA QUE UN PARTIDO POLÍTICO TENGA DERECHO A RECIBIR FINANCIAMIENTO PÚBLICO, DEBERÁ HABER CONSERVADO SU REGISTRO O ACREDITACIÓN Y OBTENIDO CUANDO MENOS EL DOS POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA ESTATAL DE DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO BAJO EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, LO CUAL DEBERÁ SER DECLARADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN LA SESIÓN QUE SIGA A LA CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN; Y

III. DEROGADA.

IV. LAS DEMÁS QUE SE DERIVEN DE LOS MANDATOS DE ESTE CÓDIGO.

Por su parte el diverso numeral 43 BIS señala que:

LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE PARTICIPEN EN LAS ELECCIONES TENDRÁN DERECHO A FINANCIAMIENTO PÚBLICO, ADICIONALMENTE A LOS DEMÁS INGRESOS QUE PERCIBAN, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

I. EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO SERÁ CALCULADO ANUALMENTE, CONSIDERANDO LA TOTALIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO EN TÉRMINOS DE ESTE CÓDIGO. LA CANTIDAD QUE EL ESTADO DESTINARÁ AL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL NÚMERO DE CIUDADANOS EMPADRONADOS AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, POR EL VEINTE POR CIENTO DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ESTADO CUANDO SE TRATE DE AÑO NO ELECTORAL Y POR EL CUARENTA POR CIENTO CUANDO SE TRATE DE AÑO EN EL QUE EXISTA CONTIENDA ELECTORAL. EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE TENGAN DERECHO AL FINANCIAMIENTO EL TREINTA Y CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EN PARTES IGUALES. EL SESENTA Y CINCO POR CIENTO RESTANTE SE DISTRIBUIRÁ EN PROPORCIÓN IGUAL A LA QUE REPRESENTA EL NÚMERO DE VOTOS LOGRADOS EN LA ANTERIOR CONTIENDA ELECTORAL DE DIPUTADOS LOCALES.

EN EL CASO DE QUE EXISTA REMANENTE EN LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO, ÉSTE SE DESTINARÁ AL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS, DISTRIBUYÉNDOSE EN LA MISMA FORMA SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

II. LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES QUE HAYAN OBTENIDO POR PRIMERA VEZ SU REGISTRO, RECIBIRÁN UNA CANTIDAD EQUIVALENTE A LA PARTE IGUALITARIA QUE POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO CORRESPONDE A CADA PARTIDO POLÍTICO, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO PRIMERO DE LA FRACCIÓN ANTERIOR;

III. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DEBERÁN EXHIBIR EN EL MES DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA VIGENCIA DE SU REGISTRO Y SEÑALAR DOMICILIO LEGAL DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO, PARA GOZAR DE ESTA PRERROGATIVA A PARTIR DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE. EN EL CASO DE ELECCIÓN EXTRAORDINARIA O ESPECIAL SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA RESPECTIVA;

IV. LOS PARTIDOS POLÍTICOS RECIBIRÁN EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO BIMESTRALMENTE, CONFORME AL CALENDARIO QUE APRUEBE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO;

V. LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBERÁN RENDIR, EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CÓDIGO, INFORMES JUSTIFICADOS DEL ORIGEN Y USO DE LOS RECURSOS OBTENIDOS, AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, COMO CONDICIÓN PARA SEGUIR RECIBIENDO EL FINANCIAMIENTO;

VI. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO SUSPENDERÁ EL FINANCIAMIENTO CUANDO RESULTE QUE EL ORIGEN Y USO DE LOS RECURSOS NO FUERON JUSTIFICADOS. PARA DECRETAR LA SUSPENSIÓN SE ESTARÁ A LA RESOLUCIÓN EMITIDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 360 DE ESTE ORDENAMIENTO;

VII. CUANDO HUBIEREN DE CELEBRARSE ELECCIONES EXTRAORDINARIAS O ESPECIALES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO DETERMINARÁ LOS MONTOS DEL FINANCIAMIENTO, TENIENDO EN CUENTA EL TIPO DE ELECCIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN I DE ESTE ARTÍCULO;

VIII. EL PARTIDO POLÍTICO QUE NO ALCANCE EL DOS POR CIENTO DE LA VOTACIÓN ESTATAL, DE DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, NO TENDRÁ DERECHO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LAS SIGUIENTES ANUALIDADES. TAMPOCO TENDRÁ DERECHO A RECIBIR LAS APORTACIONES BIMESTRALES QUE SIGAN A LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN EN QUE SE DECLARE LA PÉRDIDA DEL REGISTRO, DENTRO DEL AÑO QUE CORRA; Y

IX. POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

A) LA CAPACITACIÓN POLÍTICA, INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA, ASÍ COMO LAS TAREAS EDITORIALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SERÁN APOYADAS MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DEL REGLAMENTO QUE EXPIDA EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO;

B) EL CONSEJO GENERAL NO PODRÁ ACORDAR APOYOS EN CANTIDAD MAYOR AL 70% ANUAL, DE LOS GASTOS COMPROBADOS QUE POR LAS ACTIVIDADES A QUE

SE REFIERE ESTA FRACCIÓN HAYAN EROGADO LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR;

C) LAS CANTIDADES A QUE SE REFIERE ESTA FRACCIÓN NO PODRÁN SER SUPERIORES AL 10% DE LO QUE EL PARTIDO POLÍTICO RECIBA EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DE ESTE ARTÍCULO;

D) LAS CANTIDADES QUE EN SU CASO SE DETERMINEN PARA CADA PARTIDO, SERÁN ENTREGADAS EN MINISTRACIONES CONFORME AL CALENDARIO PRESUPUESTAL QUE SE APRUEBE ANUALMENTE; Y

E) SE DEBERÁN APORTAR COMPROBANTES FISCALES PARA TENER DERECHO A ESTE FINANCIAMIENTO.

Como se podrá advertir, en el caso no se colmó el requisito previo de haber alcanzado cuando menos un dos por ciento de la votación por cada partido político. Es el caso de Movimiento Ciudadano no obtuvo el porcentaje mandado por la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y el Código de Instituciones y Procedimientos electorales.

Luego entonces ningún derecho se le viola al impugnante y por ello se debe sostener en sus términos el acuerdo recurrido al haberse tomado éste en fiel observancia a lo establecido en los artículos 17 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 40 y 43 bis del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Dispositivos legales que como ya fue apuntado son los que abordan el tópico del financiamiento público al que tienen derecho los partidos políticos, así como también el supuesto que implica la pérdida de tal prerrogativa, es decir, cuando no se obtuvo “cuando menos el dos por ciento de la población válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa”

Aparte de fundado y como ya se estableció en parte conducente en estos alegatos, el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Guanajuato, correspondiente a la sesión ordinaria del 18 de enero del año en curso, contiene la motivación suficiente, explicando en cada uno de los temas que aborda y contenidos en los once RESULTANDOS de que consta, las razones tenidas en cuenta para determinar finalmente el monto del financiamiento público a que tienen derecho para este año dos mil trece, los partidos políticos que en el propio acuerdo se enuncian y entre los que no están contemplados los de Movimiento Ciudadano y del Trabajo.

Por estas consideraciones es que en el caso, como ya se indicó está en presencia de dos evidentes causales de improcedencia, previstas en las fracciones II y III del artículo 325 del Código Comicial local, trayendo esta circunstancia por consecuencia natural y legal además, el sobreseimiento del asunto, en términos del artículo 326, fracción IV del propio ordenamiento legal.

Ad-Cautelam y para el caso de que la Sala instructora decida dar trámite al recurso de revisión hecho valer por el partido Movimiento Ciudadano cabe indicar que en la ley electoral local(Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato) no está previsto que en tratándose del medio de impugnación citado, opere la suplencia de la queja, ni mucho menos de la deficiente queja invocada por el actor. Implicando esto que dicho recurso de revisión es de estricto derecho y que por tanto, la autoridad instructora deberá resolver con sujeción a los agravios planteados, observando el principio de legalidad.

De tal suerte es que la autoridad jurisdiccional electoral, debe desestimar la alegación del quejoso en cuanto eleva la solicitud de que en favor del partido político que representa, Movimiento Ciudadano se aplique de ser necesario la suplencia de la deficiente queja.

Sobre el particular tienen puntual aplicación las siguientes jurisprudencias, que por su importancia estimo conveniente transcribirlas:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.- De conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II, y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3o. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las

autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

III.- Finalmente el Partido Acción Nacional manifestó:

I. RESPECTO AL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO.

El Partido Político Movimiento Ciudadano presenta, un infundado e improcedente Recurso de Revisión contra el acuerdo número CG/001/2013 de fecha 13 de enero de dos mil trece, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se determinó que el Partido Movimiento Ciudadano no tendrá derecho a recibir financiamiento público para los años dos mil trece al dos mil quince, ya que no alcanzó el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa en la elección ordinaria de dos mil doce.

Mediante auto de notificación de fecha 7 de febrero de 2013, el Partido Acción Nacional a quien represento fue notificado como Tercero Interesado del Recurso de Revisión interpuesto por el Partido Movimiento Ciudadano, ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Electoral Estatal que Usted preside en fecha 8 ocho de febrero del año 2013 dos mil trece, a las 15:10 quince horas, con diez minutos.

II. RESPECTO DE LOS AGRAVIOS.

Respecto a los infundados e inoperantes agravios esgrimidos por el Partido Movimiento Ciudadano, me permito señalar lo siguiente:

En esencia, el Representante del Partido Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, manifiesta que su partido se duele de que la autoridad administrativa electoral, pretende despojar su derecho a recibir financiamiento público por el periodo 2013 al 2015, y que además incurre en una violación al artículo 14 constitucional, pues los deja en un estado vulnerable, al no poder contar con el recurso económico para poder llevar a cabo las tareas que le han sido encomendadas, además en una situación de desigualdad y de falta de certeza para cualquier proveedor.

En este orden de ideas, cabe señalar que este argumento del partido actor deviene inatendible, en virtud de que descontextualizar el contenido de lo establecido en nuestra Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, generaría una incertidumbre jurídica para los demás partidos políticos, por las siguientes razones:

PRIMERA.- Se establece en el artículo 17 párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, que para que un partido nacional tenga derecho a recibir financiamiento público, deberá haber conservado su acreditación y obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados del Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, lo cual deberá ser declarado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión que siga a la calificación de la elección.

SEGUNDA.- El artículo 40, fracción II del Código de Instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Guanajuato, establece que para que un partido político tenga

derecho a recibir financiamiento público, deberá haber conservado su registro o acreditación y obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, lo cual deberá ser declarado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión que siga a la calificación de la elección.

TERCERA.- *En el Código de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Guanajuato, en su artículo 43bis, fracción VIII, se establece que el partido que no alcance el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, no tendrán derecho al financiamiento público para las siguientes anualidades.*

Consecuentemente los ordenamientos normativos mencionados son muy claros en señalar que el Partido Político Movimiento Ciudadano, no alcanzó el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados del Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, por tal motivo no tendrán derecho al financiamiento público para las siguientes anualidades, como tampoco recibir aportaciones bimestrales que sigan a la fecha de la resolución que se declare la pérdida del registro a la fecha que corra, esto es, no cumplió con los requisitos necesarios para la obtención del recurso, lógicamente que es natural el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, debido a que se encuentra totalmente apegado a derecho.

Con lo anterior, se acredita que son en parte infundados y en parte inoperantes los agravios que formula el recurrente. Infundado porque la normativa es muy clara e inoperante porque no son suficientes los argumentos para solicitar el financiamiento.

*Por lo anterior, se estima que no asiste la razón al partido impugnante y por ende, se debe confirmar el acuerdo **CG/001/2013** pues no subsiste el objeto de los agravios.*

SÉPTIMO.- Adicionalmente a los principios señalados en el considerando cuarto de esta determinación, sobre los cuales se sustenta el presente fallo, esta Sala Unitaria procederá, según sea el caso, pero sin que ello ocasione lesión al impetrante, al análisis y estudio de los agravios expresados de manera conjunta o separada, lo cual es acorde con la Jurisprudencia sentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reza en los términos siguientes:

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.—*El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.*

Con apoyo en lo anterior esta Sala por cuestión de método y sistema procederá a realizar al estudio de forma conjunta de los agravios referentes a que:

a) La ley establece que las Constituciones y Leyes de los Estados garantizaran que los partidos políticos, reciban en forma equitativa financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes; así como contarán las condiciones necesarias para el debido cumplimiento del objeto y actividades que tienen encomendadas, por lo que afirma que al acuerdo recurrido trastoca disposiciones constitucionales, refiriéndose al artículo 41, base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que a su consideración le garantiza contar con recursos para llevar a cabo actividades permanentes.

b) La negativa del financiamiento público para las actividades inherentes de los Partidos Políticos la considera contraria a derecho por inequitativa;

c) Afirma el disidente que se establecen condiciones de desigualdad en contra **Movimiento Ciudadano**;

d) Sostiene que la legislación local, no dispone que a partir de que los Partidos Políticos Nacionales no obtengan el porcentaje mínimo para obtener el derecho a que se les otorguen prerrogativas, el monto del financiamiento que por norma constitucional les corresponde para el logro de sus fines, por haber perdido su registro, le deba ser cancelado, pretendiendo con ello excluirse de la aplicación literal de la legislación local y conllevando a considerar que dichas normas solo aplican a los partidos políticos estatales;

e) No existe disposición expresa de que dicha prerrogativa (financiamiento) asignada a los Partidos Políticos con registro nacional les deba ser cancelada por no obtener el porcentaje mínimo que señala la legislación, justificando ello en que existiría una vulneración al principio de supremacía constitucional, el hecho

de que una circunstancia que no se encuentra prevista en una ley secundaria, se anteponga y pondere por encima de una disposición expresamente contenida en la norma suprema.

f) Afirma tener derecho a recibir el financiamiento para el cumplimiento de sus compromisos adquiridos, sostenimiento de oficinas y gastos de representación, así como para poder cumplir con el fin que tiene como Partido Político que lo reduce a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, de acuerdo con los programas, principios e ideas que se postulan y que se reflejan, entre otros instrumentos, en su programa de acción.

g) Sostiene que tiene derecho a recibir financiamiento con fundamento en lo establecido en el artículo 43 BIS, fracción III del Código Electoral del Estado, por lo que considera que al encontrarse acreditado su partido político ante la autoridad administrativa electoral, tiene derecho a recibir financiamiento para el sostenimiento de oficinas y gastos de representación, relacionando tal situación con lo establecido en el artículo 52 de la ley comicial, que se refiere a la integración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

En síntesis el argumento se reduce a que tiene derecho a financiamiento para el sostenimiento de oficinas y gastos de representación, por el solo hecho de contar con registro o acreditación ante dicho Instituto Estatal, por lo que al haber presentado su constancia de vigencia de su registro como Partido Político Nacional ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, entonces, afirma que es claro que obtuvo la acreditación ante dicho organismo y en consecuencia, a su decir, tiene derecho a recibir ese tipo de financiamiento.

Son **infundados** los motivos de discordia, por las razones que a continuación se apuntan.

Los partidos políticos como entidades de interés público han de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, logrando con ello la conformación de los órganos de gobierno, para lo cual requieren de diversos elementos a fin de cumplir con sus objetivos y fines, entre ellos, el financiamiento público, que constituye el tema central materia de la impugnación.

Sin embargo, tales prerrogativas a favor de los partidos políticos, no son absolutas, tienen sus límites y restricciones.

Al respecto el artículo 116, fracción IV, inciso g) y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contemplan la participación de los partidos políticos en los procesos electorales, tanto federales como locales, y en esa medida quedan sujetos a los preceptos de las legislaciones, respectivas, y de manera similar, el acceso al financiamiento público queda regulado conforme a las atribuciones que las propias legislaturas federal o de los Estados tienen de acuerdo a los preceptos constitucionales señalados, esto es, que para el caso de las entidades federativas la Carta Magna no exige la sujeción a determinadas reglas, lo cual deja a la soberanía de los Estados su regulación correspondiente.

Congruente con este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversos juicios de revisión constitucional sometidos a su conocimiento, ha expresado que, si bien el artículo 116, fracción IV, inciso f), actualmente inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

establece como principio rector en materia electoral, la equidad en el financiamiento entre los partidos políticos para su sostenimiento y para la obtención del sufragio universal durante los procesos electorales; también lo es que, de dicho precepto se desprende que los Estados, a través de sus constituciones y de sus respectivas leyes, deben garantizar dicho principio rector, pero, sin que se imponga en la norma Suprema reglamentación específica al respecto, de tal modo, que en aplicación del principio residual que opera en materia constitucional, se deja a discreción de los Estados, a través de su actividad legislativa, la determinación de las formas y mecanismos legales correspondientes, para acceder al financiamiento público.

Ciertamente, en atención al derecho que tienen los partidos políticos con registro nacional, como es el caso del recurrente, para participar en las elecciones federales o locales, se observa el doble régimen jurídico al que deben estar, dependiendo del tipo de elección de que se trate, federal o local, pues de ser una elección federal y siendo un partido con registro nacional, las disposiciones aplicables serán las relativas al régimen federal, pero si se trata de una elección estatal, como en el caso sucede, y siendo un partido con registro nacional, deberá atenderse tanto a las disposiciones locales que rigen la elección, como a las federales que regulan la constitución y conformación del partido político, armónicamente.

Ahora, para dar respuesta puntual al problema planteado, es conveniente determinar la disposición que rige para los partidos políticos nacionales que participan en las elecciones estatales; esto es, si el precepto normativo, 41 de la Constitución Política de la República es el aplicable en materia de financiamiento local.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 2/99 y su acumulada 3/99, ha dilucidado este

planteamiento, al señalar que el mencionado artículo 41 fracción II, de la Constitución Federal, es el que se refiere expresamente a los partidos políticos nacionales y prevé el financiamiento público de los mismos, pero la fracción I del propio precepto, da derecho a estos partidos a participar en las elecciones estatales y municipales, no obstante, que debe estarse al ámbito de que se trate, ya sea federal o estatal, a fin de determinar el tipo de disposición que debe regir en materia de financiamiento público.

Y, si en el presente asunto se trata de partidos políticos nacionales que participan en el ámbito estatal, es factible concluir que deben regir las disposiciones locales, para efectos del financiamiento público, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV de la Constitución Federal.

Así es, la fracción II del artículo 41 de la Constitución Federal, por lo que respecta al financiamiento público, regula lo concerniente a los partidos políticos nacionales, pero debe estarse a lo que disponga la Ley según el ámbito en el que participe el partido político, ya sea federal o local.

Por otro lado, en el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, se establecen las bases a las que deben sujetarse las Constituciones y Normatividad de los Estados en materia electoral, y en lo particular, los lineamientos generales que rigen en el campo del financiamiento público, por lo que debe estimarse que esta es la disposición que opera en el ámbito estatal como norma especial.

Partiendo de estos razonamientos, se sigue que en tratándose de elecciones federales, la norma constitucional expresa que debe regir para los efectos del financiamiento público lo es el artículo 41, fracción II, de la Constitución Federal, y para las

elecciones estatales, la disposición aplicable lo es el artículo 116, fracción IV, inciso g) de la propia Constitución mencionada.

Lo cual queda de manifiesto, en la siguiente jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente:

FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A FIJARLO EN IGUALES TÉRMINOS QUE EN EL ORDEN FEDERAL.—*La facultad de cada legislatura local para regular el financiamiento de los partidos políticos, en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución General del país, toma como base el concepto de equidad, el cual debe traducirse, necesariamente, en asegurar a aquéllos el mismo trato cuando se encuentren en igualdad de circunstancias, de tal manera que no exista un mismo criterio que rija para todos ellos cuando sus situaciones particulares sean diversas. En estos términos, para satisfacer la equidad que impone la Constitución federal, es necesario establecer un sistema de distribución del financiamiento público, que prevea el acceso a éste de los partidos políticos, reconociendo sus distintas circunstancias. Luego, el hecho de que los criterios establecidos por un Congreso local sean diferentes a los que señala el artículo 41 constitucional para las elecciones federales, no significa que tal motivo determine, por sí solo, la inconstitucionalidad de la ley secundaria local por infracción al concepto de equidad, toda vez que el Constituyente dejó a la soberanía de los Estados la facultad de señalar las bases de distribución del financiamiento público a los partidos, de acuerdo con las características particulares de cada uno de ellos.*

También ha concluido la Corte, que como en el caso concreto, siendo la materia del recurso, disposiciones que rigen la materia del financiamiento público de los partidos políticos en el ámbito local, entonces la disposición que regula lo concerniente al asunto, en materia constitucional es el artículo 116, fracción IV, inciso f) ahora inciso g) de la Constitución Federal y no el artículo 41 de la misma Constitución Política.

Luego, si bien es cierto, como lo señala el recurrente, el artículo 116 de la Constitución Federal debe garantizar el principio de equidad por lo que cada legislación local deberá atender a las circunstancias propias que se desarrolle en cada ente al que dote de financiamiento, sin dejar de lado dicho principio, también es cierto que resulta inaceptable que el acuerdo combatido haya vulnerado el principio de equidad.

En efecto, en el artículo 116, fracción IV, inciso g) de la Constitución Federal, se establece como principio fundamental en

la materia electoral, la equidad en el financiamiento público entre los partidos políticos para su sostenimiento y para la obtención del sufragio universal durante los procesos electorales.

En el presente caso, los requisitos que exigen las disposiciones combatidas para que los partidos políticos puedan acceder al financiamiento público estriba en haber conservado su registro o acreditación y obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, requisitos que no trasgreden el principio de equidad citado.

Ello es así, porque las disposiciones impugnadas son de carácter general y, por ello, se encuentran dirigidas a todos aquellos partidos que se ubiquen en la misma situación, de tal manera que no existe un trato diferenciado entre partidos que se encuentren en igualdad de circunstancias.

Al respecto, es necesario destacar lo que señala el artículo 43 bis fracción VIII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato:

“Artículo 43 bis: Los partidos políticos que participen en las elecciones tendrán derecho a financiamiento público, adicionalmente a los demás ingresos que perciban de conformidad con las siguientes disposiciones:

“VIII.- El partido político que no alcance el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa no tendrá derecho al financiamiento público para las siguientes anualidades. Tampoco tendrá derecho a recibir las aportaciones bimestrales que sigan a la fecha de la resolución en que se declare la pérdida del registro dentro del año que corra”.

Como se puede apreciar la disposición anterior exige, entre otros requisitos, que para tener derecho al financiamiento público es necesario, por lo menos, haber alcanzado el dos por ciento de la votación estatal emitida en la última elección de diputados por el principio de mayoría relativa.

Ahora bien, de aceptarse que un partido político que no alcanzó el dos por ciento de la votación requerida tiene derecho al financiamiento público por el hecho de contar con un registro nacional, como es el caso de **Movimiento Ciudadano**, esto sí contravendría el principio de equidad señalado, en la medida que en igualdad de circunstancias un partido estatal que tampoco obtuvo dicho porcentaje de la votación no tendría derecho a dicho financiamiento.

La siguiente jurisprudencia pone de manifiesto lo antes afirmado, misma que se transcribe para su mejor comprensión, con el rubro y texto siguiente:

FINANCIAMIENTO. EL PREVISTO POR EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, INCISO A), CONSTITUCIONAL, ES EXCLUSIVO DE AQUELLOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE HAYAN CONTENDIDO EN LOS ÚLTIMOS COMICIOS Y QUE OBTUVIERON POR LO MENOS EL DOS POR CIENTO DE LA VOTACIÓN EN ALGUNA DE LAS ELECCIONES FEDERALES ORDINARIAS.—Al tipo de financiamiento previsto por el artículo 41, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tienen derecho todos los partidos políticos nacionales por el solo hecho de contar con registro, sino que tal beneficio es exclusivo de aquéllos que contendieron en los últimos comicios y obtuvieron por lo menos el dos por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de la República, y que de esa manera lograron conservar su registro; habida cuenta que la disposición contenida en el citado inciso a), no debe interpretarse en forma aislada, sino en su contexto, esto es, integrada con el segundo párrafo de la referida fracción II, que precisamente se refiere a los partidos políticos que hayan logrado mantener su registro después de cada elección.

Sería inequitativo, además, que un partido político estatal tenga derecho al financiamiento público porque ha alcanzado el mínimo requerido, que lo es, el dos por ciento de la votación estatal emitida en la última elección para diputados por el principio de mayoría relativa; y, que se encuentre, por otro lado, con este mismo derecho otro partido político que no obtuvo el porcentaje mínimo de la votación local, pero que se le deba otorgar dicho financiamiento público por ser un partido político nacional. Esto a consideración de esta Sala Electoral, también rompería con el principio de equidad.

Aunado, a que no debe perderse de vista, que los recursos del financiamiento público son recursos estatales y no federales,

por lo que ambos tipos de partidos, estatales y nacionales, deben estar sujetos a las mismas disposiciones locales con independencia del tipo de registro con que cuenten, aplicando y cumpliendo con el principio de equidad en materia electoral, por lo que se deben observar las mismas reglas a los partidos que participen en el ámbito local.

Por consiguiente, los partidos políticos como entidades de interés público deben contar con un financiamiento público para el logro de los fines que persiguen, pero no se debe perder de vista, que en el caso en concreto, dado el marco jurídico vigente en el Estado de Guanajuato respecto a la materia electoral y en particular en el tema de financiamiento público, se considera que las disposiciones impugnadas no rompen con el principio de equidad, puesto que los partidos políticos, ya sea que tengan registro estatal o nacional, que no alcancen el mínimo de votación requerida, no tendrán derecho al financiamiento público, lo que los ubica en un plano de igualdad ante situaciones iguales.

Se reitera, del análisis expuesto, relativo a las disposiciones que rigen en materia de financiamiento para el Estado de Guanajuato, para partidos políticos estatales como nacionales y, que han sido transcritas en un apartado anterior, es claro, que de las mismas se desprende el derecho de los partidos políticos para acceder al financiamiento público no de manera permanente y automática, sino que existe un elemento temporal para su asignación, y es que conforme a los artículos 17 de la Constitución Local, 40, fracción II y 43 bis, fracción VIII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, interpretados de manera armónica, sistemática y funcional frente a lo estipulado en la fracción III de este último dispositivo legal mencionado, cada año los partidos políticos nacionales deberán exhibir en el mes de noviembre su constancia

actualizada de la vigencia de su registro, constancia que por sí misma no basta para el goce a la prerrogativa relativa al financiamiento público de la que habla este mismo precepto legal, pues deben reunirse las condiciones que se mencionan en los dispositivos legales citados y que se reducen fundamental y principalmente a la necesidad de que para acceder al financiamiento público se deba **conservar el registro o acreditación y obtener cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa**, lo que aplica como ya se ha mencionado, tanto para los partidos políticos nacionales como para los estatales.

En consecuencia, resulta inexacto lo sostenido por el disidente, en el sentido de que para acceder al financiamiento, sólo es necesario mantener el registro o acreditación, sin mayores requisitos que ese, por las consideraciones antes expuestas; las que a su vez se encuentran en plena armonización con la Constitución Federal, sin que se trastoque el principio de equidad a que hace referencia el artículo 116, fracción IV, inciso g) de la Constitución de la República, principio al que la Suprema Corte se ha referido al resolver las Acciones de Inconstitucionalidad acumuladas bajo los números 2/99 y 3/99, y que a propósito conviene hacer referencia en este apartado en los siguientes términos:

“En dicha disposición fundamental se establece, como principio rector en materia electoral, la equidad en el financiamiento público entre los partidos políticos para su sostenimiento y para la obtención del sufragio universal durante los procesos electorales.

De la disposición fundamental se desprende que los Estados, a través de su Constitución Estatal y sus respectivas leyes, deben garantizar dicho principio rector, pero sin que imponga reglamentación específica al respecto, de tal manera que deja a discreción de las entidades la determinación de las formas y mecanismos legales correspondientes, tendientes a buscar una situación equitativa entre los partidos políticos en cuanto al financiamiento para la realización de sus actividades y fines.

Ahora bien, si el Poder Reformador de la Constitución dejó en libertad a los Estados la fijación de las formas y mecanismos legales para los efectos antes precisados, ello no impide analizar las disposiciones relativas, a fin de establecer si éstas efectivamente cumplen en su esencia con el principio de equidad mencionado, ya que, de otra manera, podrían introducirse disposiciones que eventualmente pudieran transgredir dicho principio de equidad en favor de

uno u otros partidos y en detrimento de otros, que pudieran afectar el sostenimiento de los mismos y la obtención del sufragio universal en contravención a los fines por los cuales el Poder Reformador de la Constitución llevó a instituir y garantizar dicho principio en el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal.

La equidad en materia electoral, tratándose de financiamiento público a los partidos, estriba en el derecho igualitario consignado en la ley para que todos puedan alcanzar esos beneficios, atendiendo a las circunstancias propias de cada partido, de tal manera que cada uno perciba lo que proporcionalmente le corresponde acorde con su grado de representatividad.

Debe distinguirse entre el derecho mismo para recibir financiamiento público y el porcentaje que a cada partido le corresponda; lo primero atañe a la situación legal que autoriza y garantiza que, conforme a las bases y criterios respectivos, cada partido esté en condiciones de recibir los recursos económicos necesarios; y, lo segundo, se refiere a la situación real de cada partido, que justifica el otorgamiento de mayores o menores recursos por financiamiento público, pues las circunstancias particulares de un partido no necesariamente coinciden con la de los demás, lo que justifica la aplicación de porcentajes o montos diferentes.

Así, el principio de equidad se logra, primero, mediante el establecimiento de reglas generales, a través de las cuales se garantice que, conforme a los mecanismos y criterios respectivos, los partidos políticos puedan obtener financiamiento público; y, segundo, mediante disposiciones que establezcan reglas de diferenciación entre los respectivos partidos, acorde con su grado de representatividad y situación particular, a efecto de concederles de manera proporcional los recursos que a cada uno corresponda.”

A efecto de robustecer lo antes expresado y patentizar la voluntad auténtica del legislador, esto es, desentrañar el verdadero sentido de las disposiciones interpretadas, de la exposición de motivos de la reforma constitucional para el Estado de Guanajuato, en lo particular en materia de financiamiento, se expresa, en lo que interesa, que:

“[...] Tratándose de prerrogativas y derechos de los partidos políticos, el derecho a recibir financiamiento, está sujeto a cumplir otros requisitos que establece el código electoral, esto es, que pasado un proceso electoral el financiamiento público, se asigna en razón a la representatividad o fuerza electoral que los partidos políticos hubiesen ,acreditado en el anterior proceso electoral en el estado, es decir, en proporción al número de votos obtenidos en proporción al número de votos obtenidos en elección de diputados locales.

Si un partido político nacional no alcanza en la elección de diputados locales el mínimo de votación que el Código Electoral establece como causa para que los partidos políticos locales pierdan incluso su registro, es decir, el mínimo de representatividad de la votación válida emitida en la elección de legisladores no es factible que un partido político sea tomado en consideración para asignarle financiamiento público, pues al no haber obtenido el mínimo de representatividad no se satisface el requisito que se establece en la norma electoral.

Resulta importante que en nuestra constitución, se contemple ese supuesto, ya que en las elecciones pasadas participaron ocho partidos con registro nacional y sólo cinco de ellos cumplieron con el requisito de representatividad.

Al no contar, con normas claras la autoridad administrativa electoral otorgo financiamiento público a todos los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, lo que generó que se acudiera a las instancias jurisdiccionales tanto locales como federales, dando como resultado que los partidos políticos nacionales que no alcancen el umbral establecido como mínimo no tendrán derecho a recibir financiamiento público, ni al goce de otros derechos, mismos que se detallaran en la legislación secundaria [...]”

Visible en la página web del Congreso del Estado de Guanajuato, identificada bajo la nomenclatura

“PODER LEGISLATIVO DE GUANAJUATO.- LX LEGISLATURA”.

Así es, al efectuar una interpretación armónica, sistemática y funcional de los preceptos reformados, contenidos en los artículos

17 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 19, 24 Bis, 29, 40 y 43 Bis del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se desprende de manera inequívoca, por lo que respecta al financiamiento público, lo siguiente:

A).- Los partidos políticos con registro, debidamente acreditados ante la autoridad electoral local, que participen en las elecciones y hayan obtenido por lo menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, tendrán derecho a recibir financiamiento público estatal en los términos que ordena dicho Código.

B).- Los partidos políticos que hayan cumplido con los anteriores requisitos, tendrán derecho al financiamiento público estatal. Del total de dicho financiamiento público referido que se otorga a los partidos políticos, un 35% (treinta y cinco por ciento) se distribuye entre éstos, por partes iguales, ya sea nacionales o locales, por el simple hecho de haber reunido los requisitos especificados en el inciso anterior, en tanto que, el 65% (sesenta y cinco por ciento) restante, se distribuye entre estos partidos políticos en proporción al número de votos que hubieren logrado en la pasada elección local de diputados.

C).- De lo anterior se sigue que, cuando un partido político estatal no hubiese obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, perderá su registro y, en consecuencia, las prerrogativas previstas en el mismo Código, así como también no tendrá derecho al financiamiento público.

D).- Que los partidos políticos nacionales, que participen en las elecciones estatales sólo tendrán derecho al financiamiento público estatal cuando haya conservado su acreditación y hayan obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de Diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, condición a la que están sujetos en igualdad de condiciones los estatales; y,

E).- Que los partidos políticos nacionales que hayan perdido su registro a nivel nacional ante el órgano electoral federal, podrán solicitar su registro estatal ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, cuando hubieren obtenido al menos el dos por ciento de la votación válida en la última elección para diputados al Congreso del Estado, con lo que reciben un trato preferencial.

Lo anterior, quiere decir que los partidos políticos nacionales o estatales, tendrán derecho al financiamiento público estatal, siempre que hayan conservado su registro y hayan obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa.

Esto es, los partidos políticos, nacionales o estatales, que hayan reunido estos elementos tendrán derecho al financiamiento público estatal, así como a las demás prerrogativas previstas en el mismo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

De esta guisa se sigue que estos partidos políticos tendrán derecho, entre otras prerrogativas, a lo determinado en las fracciones I, III y IV del artículo 43 bis del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Así, por el contrario, tal como lo establece la fracción VIII del precepto en comento, el partido o partidos políticos que no alcancen el dos por ciento de la votación válida estatal de Diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa no podrán acceder al financiamiento público para las siguientes anualidades.

En estas condiciones los agravios analizados hasta esta parte del fallo resultan infundados, pues como se dijo, el acuerdo número CG/001/2013 de fecha dieciocho de enero de dos mil trece fue emitido con apego a derecho, esto es, ajustándose a los lineamientos previstos en la Constitución Federal, así como la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y disposiciones del Código Comicial, a que se ha hecho referencia hasta este apartado, por lo que ningún agravio irroga tal determinación al impugnante.

Finalmente, en lo que corresponde al concepto de agravio en el que el inconforme refiere que la decisión impugnada viola lo previsto en la fracción II del artículo 41 constitucional que señala que la ley garantizará a los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con los elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento público de los propios partidos y de sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado, se establece lo siguiente.

Tales argumentaciones resultan infundadas, porque como se verá el supuesto normativo invocado, en el cual se contiene la regla de que los recursos públicos prevalezcan sobre los de orden privado, regula lo concerniente a los partidos políticos nacionales,

pero debe estarse a lo que disponga la ley, según el ámbito en el que participe el partido político, ya sea federal o local.

Ciertamente, como ya se expuso en líneas anteriores al haber sido analizados otros motivos de disenso, el derecho que tienen los partidos políticos con registro nacional, como es el caso de **Movimiento Ciudadano**, para participar tanto en elecciones federales o locales, se observa el doble régimen jurídico al que deben estar, dependiendo del tipo de elección de que se trate, pues de ser una elección federal y siendo un partido con registro nacional, las disposiciones aplicables serán las relativas al régimen federal, pero si se trata de una elección estatal, y siendo un partido con registro nacional, deberá atenderse tanto a las disposiciones locales que rigen la elección, como a las federales que regula la constitución.

Para dar respuesta puntual al problema planteado, es conveniente determinar la disposición que rige para los partidos políticos nacionales que participan en las elecciones estatales; esto es, si es el precepto normativo, 41 de la Constitución Política de la República es el aplicable en materia de financiamiento local.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 2/99 y su acumulada 3/99, ha dilucidado este planteamiento, al señalar que el mencionado artículo 41 fracción II de la Constitución Federal, es el que se refiere expresamente a los partidos políticos nacionales y prevé el financiamiento público de los mismos, pero la fracción I del propio precepto da derecho a estos partidos a participar en las elecciones estatales y municipales, no obstante que debe estarse al ámbito de que se trate, ya sea federal o estatal, a fin de determinar el tipo de disposición que debe regir en materia de financiamiento público.

Lo anterior es así además, al considerar que los partidos políticos nacionales, por el simple hecho de conservar su registro ante el órgano electoral federal, gozan del derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, conforme a lo estatuido por la fracción I del artículo 41 de la Constitución Federal, y sólo en el caso de que pierdan su registro como partido político nacional, perderán su acreditación ante la autoridad comicial local, según lo dispone el artículo 29 párrafo segundo del código electoral del estado, y por tanto, es posible, como ocurre en la especie, que un partido político nacional reúna los requisitos para obtener y conservar su registro como tal, al cumplir incluso con la cuota de representatividad exigida para ese efecto a nivel nacional por el artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y que a nivel estatal no se cubra esa cuota que se exige para tener derecho a financiamiento público estatal, independientemente de su derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

En estas condiciones, si en el caso concreto se trata de un partido político nacional, **Movimiento Ciudadano**, que participa en el ámbito estatal, es de concluirse que debe regir la disposición local respectiva que impone como requisito alcanzar una votación mínima para acceder al financiamiento público, atento a lo previsto en el artículo 116, fracción IV de la Constitución Federal, y por lo tanto, la fracción II del artículo 41 de la Constitución Federal que ordena que para el financiamiento de los partidos políticos se debe garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado, no es susceptible de ser violada por la autoridad electoral local, al ser una norma que aplica para el financiamiento de los partidos políticos en las elecciones federales.

Por lo anterior, es **infundada** la apreciación del recurrente al afirmar que la norma estatal no hace distinción para que reciba

financiamiento público, cuando se trata de un partido político nacional y que por ese simple hecho debe de recibir financiamiento, por lo menos para oficina y gastos de representación, pues no existe norma que lo autorice, sino por el contrario, la disposición es determinante, en el sentido de que si el Partido Político no satisface las condiciones arriba apuntadas no tiene derecho a financiamiento público, además de que el cumplimiento o incumplimiento de lo establecido en el artículo 43 bis fracción III del Código Electoral, de ningún modo le garantizan derecho a financiamiento público, pues como se viene exponiendo existen reglas precisas para ello.

No sobra decir, que la normativa local, en cuanto al otorgamiento del financiamiento público no hace colisión con algún artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente con el principio de equidad en el financiamiento público de los partidos políticos, situación que ya fue materia de pronunciamiento por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado siete de marzo de dos mil doce, dentro del expediente SUP-JRC-26/2012, cuyos argumentos se reproducen a continuación:

Tocante a la cuestión relativa al otorgamiento de financiamiento público en forma equitativa, cabe decir que en el inciso g), base IV, del artículo 116, Constitucional se establece:

(...)

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

(...)

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes;

(...)

De la anterior transcripción se aprecia que las legislaciones locales deben garantizar que se otorgue en forma equitativa a los partidos políticos, financiamiento público para su sostenimiento y el desarrollo de actividades tendientes a la obtención del voto, sin que para ello, se les sujete a determinadas reglas, por no exigirse en la propia Ley Fundamental.

En efecto, no se determinan criterios concretos para el cálculo del financiamiento público total que deberá distribuirse entre los partidos políticos, ni tampoco la forma de distribución, cantidad o porcentaje que de éste deba corresponder a cada uno de ellos. Se confiere al ámbito interno de cada entidad federativa, la libertad para el establecimiento de las formas, procedimientos y mecanismos para el otorgamiento de éste, con la única limitante de acoger tal principio, por lo que cada legislación electoral local deberá atender a las circunstancias propias, es decir, se deja a su discreción, la determinación de las formas y mecanismos legales correspondientes, tendientes a buscar una situación equitativa entre los partidos políticos en cuanto al financiamiento para la realización de sus actividades y fines.

Lo anterior implica que el derecho a la entrega de financiamiento público, no nace del sólo hecho de detentar la calidad de partidos políticos nacionales y de tener la necesidad de hacer diversas erogaciones para su sostenimiento, sino del cumplimiento de los requisitos que las legislaturas locales determinen, siempre y cuando no contraríen el principio de equidad estatuido en la Carta Magna. Una cosa es el derecho constitucional que tienen de participar en ese tipo de procesos, derivado de lo dispuesto en el artículo 41 constitucional, y otra la obligación que tienen de cumplir con la normatividad que regula su intervención en los procesos electorales locales, incluyendo la relativa a los requisitos que se deben cumplir para tener derecho a recibir financiamiento público.

Como se evidenció, en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se eleva a la categoría de principio fundamental rector en la distribución del financiamiento público a los partidos políticos, la equidad, cuyo alcance en la materia, se requiere precisar.

En términos generales, el concepto de equidad se relaciona con el de justicia, tomando en cuenta un conjunto de particularidades que individualizan la situación de las personas sujetas a ella, de modo que el concepto pugna con la idea de una igualdad o equivalencia puramente aritmética. Es decir, rechaza la aplicación lisa y llana de una solución dada mediante la identificación plena de todos los casos, sin atender a las peculiaridades de cada uno, y por eso, sus efectos se han enunciado con la fórmula de la justicia distributiva, relativa al trato igual a los iguales y desigual a los desiguales.

En efecto, la equidad en materia electoral, tratándose de financiamiento público a los partidos, estriba en el derecho igualitario consignado en la ley para que todos puedan alcanzar esos beneficios, atendiendo a las circunstancias propias de cada partido, de tal manera que cada uno perciba lo que proporcionalmente le corresponde, acorde con su grado de representatividad.

Debe distinguirse entre el derecho mismo para recibir financiamiento público y el porcentaje que a cada partido le corresponda. Lo primero atañe a la situación legal que autoriza y garantiza que conforme a las bases y criterios respectivos, cada partido esté en condiciones de recibir los recursos económicos necesarios. Lo segundo, se refiere a la situación real de cada partido, que en su caso justifica el otorgamiento de mayores o menores recursos por financiamiento público, pues las circunstancias particulares de un partido no necesariamente coinciden con la de los demás, lo que justifica la aplicación de porcentajes o montos diferentes.

El principio de equidad se logra, primero, mediante el establecimiento de reglas generales, a través de las cuales se garantice que, conforme a los mecanismos y criterios respectivos, los partidos políticos, al cumplir determinados requisitos, como demostrar cierta representatividad o fuerza electoral, puedan obtener financiamiento público. Segundo, mediante disposiciones que establezcan reglas de diferenciación entre los respectivos partidos, acorde con su grado de representatividad y situación particular, a efecto de, en caso de cumplir con los requisitos atinentes, concederles de manera proporcional los recursos que a cada uno corresponda, con independencia de cuestiones de hecho, como, por ejemplo, que ante la falta de financiamiento público estatal, un partido no pueda realizar sus actividades ordinarias de la misma forma que un instituto político al que sí se le otorgó, o que el porcentaje de financiamiento público de un partido con derecho al mismo, aumentará en caso de que a otro u otros institutos políticos se les niegue su ministración. Se insiste, en el concepto de equidad, se comprende el derecho de acceso al financiamiento público de los partidos políticos, así como el otorgamiento de este beneficio, en función de sus diferencias específicas, como podrían ser, su creación reciente como partidos políticos, o bien, tomando en cuenta su participación en procesos electorales anteriores, y entre estos últimos, la fuerza electoral de cada uno y no a cuestiones de hecho como las señaladas.

La facultad de cada legislatura local, para regular lo atinente en esta materia, tomando como base el principio de equidad, debe traducirse necesariamente en asegurar a los partidos

políticos el mismo trato, cuando se encuentren en igualdad de circunstancias, de tal manera que no exista un mismo criterio que rija para todos ellos aunque sus situaciones particulares sean diversas. En estos términos, para satisfacer el principio de equidad que se impone en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario establecer un sistema de distribución del financiamiento público que prevea el acceso a éste de los partidos políticos, reconociendo sus distintas circunstancias.

En la especie, el artículo 17, párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, dispone:

El Estado garantizará que los Partidos Políticos cuenten, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para el desarrollo de sus actividades. La Ley determinará las formas específicas de su intervención en los procesos electorales, sus derechos, prerrogativas, formas y reglas de financiamiento, los topes y bases a sus gastos de precampaña y de campaña, así como el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro o acreditación después de cada elección se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico.

Para que un Partido Político Estatal conserve su registro, reciba financiamiento y goce de los derechos y las prerrogativas que esta Constitución y la Ley le conceda, deberá obtener el dos por ciento de la votación válida estatal de Diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, lo cual deberá ser declarado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión que siga a la calificación de la elección.

Para que un Partido Político Nacional tenga derecho a recibir financiamiento público, deberá haber conservado su acreditación y obtenido cuando menos el por ciento de la votación válida estatal de Diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, lo cual deberá ser declarado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión que siga a la calificación de la elección.

Por su parte, el artículo 43 bis, fracción VIII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, establece:

Los partidos políticos que participen en las elecciones tendrán derecho a financiamiento público, adicionalmente a los demás ingresos que perciban, de conformidad con las siguientes disposiciones:

(...)

VIII. El partido político que no alcance el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, no tendrá derecho al financiamiento público para las siguientes anualidades. Tampoco tendrá derecho a recibir las aportaciones bimestrales que sigan a la fecha de la resolución en que se declare la pérdida del registro, dentro del año que corra; y

(...)

En estas normas jurídicas estatales, se propaga el principio de equidad reconocido en la Ley Fundamental, en tanto que procuran que los partidos políticos reciban financiamiento público para lograr su objetivo, estableciendo las normas para acceder a tal prerrogativa.

Sin que el artículo 43 bis, fracción VIII, transcrito transgreda el principio de equidad referido, ya que no determina un trato diferenciado a los entes políticos, si se toma en cuenta que todos se someten a la misma reglamentación y el partido que tenga una posición distinta a otro o a los demás institutos políticos, en función de la última votación alcanzada, es decir, el que no obtenga el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados por el principio de mayoría relativa, no tendrá derecho a financiamiento público, pues es incuestionable que no está en la misma situación de aquéllos que sí obtuvieron el porcentaje.

Por tanto, el artículo impugnado no se opone al artículo 41, fracción II, de la Constitución General.

Sirven de orientación a lo anterior por analogía, las siguientes tesis de jurisprudencia:

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. EL ARTÍCULO 30, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE CONDICIONA SU ACCESO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL. El artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal podrá expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales de esa entidad, sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomarán en cuenta los principios rectores contenidos en los incisos b) a i) de la fracción IV del artículo 116 de la propia Constitución Federal, entre ellos, el de equidad. En esa tesitura, el artículo 121 del mencionado Estatuto dispone que los partidos políticos recibirán, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento. Ahora bien, el hecho de que el artículo 30, párrafo primero, del Código Electoral del Distrito Federal, establezca que los partidos políticos que por sí mismos hubieren obtenido por lo menos el 2% de la votación total emitida en la elección de diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de representación proporcional, tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, no viola el mencionado principio, pues, por una parte, se da un trato igual a todos aquellos partidos políticos que se encuentren en la misma situación, ya que los que no alcancen la votación mínima requerida no tendrán derecho al financiamiento público y, por otra, aun cuando los partidos políticos conserven su registro nacional, lo cierto es que si no tienen a nivel local (Distrito Federal) representatividad, al no haber alcanzado el porcentaje mínimo, es evidente que no están en situación igual a aquellos que sí obtuvieron ese porcentaje, de manera que en atención a que se trata de recursos locales y no federales, es indudable que los partidos políticos que contiendan en las elecciones del Distrito Federal, con independencia de que cuenten con registro nacional, deben estar a las disposiciones locales, las cuales al aplicar las mismas reglas a los partidos que participan en el mismo ámbito local, cumplen con el principio de equidad en materia electoral. Además, conforme al artículo 41 de la Constitución Federal, los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fines promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público; de ahí que se instituya en las disposiciones fundamentales, el otorgamiento de financiamiento público para que logren tales fines; sin embargo, por la misma razón, si dentro del ámbito local, los partidos beneficiados con este tipo de financiamiento no logran una representatividad significativa para el logro de los fines que persiguen, no se justifica el acceso al financiamiento público.⁹

⁹ Tesis P./J.29/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional, tomo XIX, Mayo de 2004, página 1156.

EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL. NO VIOLA ESTE PRINCIPIO EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, QUE ESTABLECE LAS REGLAS GENERALES CONFORME A LAS CUALES DEBERÁ DISTRIBUIRSE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. El artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal consagra como principio rector en materia electoral la equidad en el financiamiento público entre los partidos políticos, la cual estriba en el derecho igualitario consignado en la ley para que todos los partidos puedan llevar a cabo la realización de sus actividades ordinarias y las relativas a la obtención del sufragio universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada partido, de manera tal que cada uno perciba lo que proporcionalmente le corresponda, acorde con su grado de representatividad. En congruencia con lo anterior, al establecer el artículo 69, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Morelos las reglas conforme a las cuales deberá distribuirse el financiamiento público, en efectivo o en especie, que reciban los partidos políticos con cargo al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, autorizando, por una parte, recursos ciertos y fijos (10% del monto total del financiamiento público distribuido en forma igualitaria a todos los partidos políticos registrados) y, por la otra, recursos aleatorios (40% en forma igualitaria y 50% en proporción a los votos obtenidos, para aquellos partidos que hubieren conseguido más del 3% de la votación en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior), no transgrede el principio rector de referencia, porque no da un trato diferenciado a los partidos políticos, en virtud de que todos están sujetos a la misma reglamentación y el partido que guarde una situación distinta frente a otro en función de la votación última obtenida, recibirá un trato distinto y proporcional a esa situación. Conforme al principio de equidad en materia electoral los partidos políticos se diferencian por el grado de representatividad que tengan entre los ciudadanos votantes, sin que ello limite su derecho a obtener mayores recursos si logran una representación mayor pues, de estimarse lo contrario, se llegaría al extremo de reconocer una condición igualitaria entre partidos con distinta representatividad, concediéndoles mayores derechos para la asignación de recursos a los que no hubieren obtenido una votación mayor de los que sí la tienen.¹⁰

¹⁰ Tesis 89, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, Materia Constitucional, página 692.

Además, esta Sala Superior considera que el establecimiento de un porcentaje de votación para la obtención del financiamiento público, respeta el principio de equidad entre los partidos políticos, porque atiende a la representatividad de las distintas fuerzas políticas.

En efecto, el mismo porcentaje se aplica a todos los partidos que participan en el ámbito estatal, y a juicio de la legislatura local, es el elemento indicativo de la representatividad de los partidos que justifica el acceso a la prerrogativa mencionada, pues si lo que el órgano reformador de la Constitución General pretende, es consolidar un sistema pluralista de partidos y unas selecciones competitivas en el marco de una democracia constitucional, entonces es preciso que los entes políticos como instituciones de interés público, sean órganos realmente funcionales para alcanzar los objetivos que les fueron fijados.

Para tal fin, los partidos deben contar con un mínimo de representatividad que les permita ser no solamente viables, sino también funcionales, pues de lo contrario no podrían alcanzar sus propósitos.

En esas condiciones, sería indeseable que para la consolidación o desarrollo de un sistema de partidos plural y competitivo, un ente político que no alcanzó un mínimo de fuerza electoral siguiera gozando de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las orientadas a obtener el voto durante los procesos comiciales.

Similar criterio sostuvo esta Sala Superior al resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-270/2011.

De la transcripción que antecede, se pueden destacar los siguientes razonamientos:

1.- Las legislaciones locales deben garantizar que se otorgue en forma equitativa a los partidos políticos, financiamiento público para su sostenimiento y el desarrollo de actividades tendientes a la obtención del voto, sin que para ello, se les sujete a determinadas reglas, por no exigirse en la propia Ley Fundamental.

2.- No se desprende que se establezcan criterios concretos para el cálculo del financiamiento público total que deberá distribuirse entre los partidos políticos, ni tampoco la forma de distribución, cantidad o porcentaje que de éste deba corresponder a cada uno de ellos.

3.- Se confiere al ámbito interno de cada entidad federativa, la libertad para el establecimiento de las formas, procedimientos y mecanismos para el otorgamiento de éste, con la única limitante de

acoger tal principio, por tanto cada legislación electoral local debe atender a las circunstancias propias, es decir, se deja a su discreción, la determinación de las formas y mecanismos legales correspondientes, tendientes a buscar una situación equitativa entre los partidos políticos en cuanto al financiamiento para la realización de sus actividades y fines.

4.- El derecho a la entrega de financiamiento público, no nace del hecho de detentar la calidad de partidos políticos nacionales y de tener la necesidad de hacer diversas erogaciones para su sostenimiento, sino de la satisfacción a los requisitos que la legislatura local determina.

5.- Debe distinguirse del derecho constitucional que tienen de participar en ese tipo de procesos, derivado de lo dispuesto en el artículo 41 constitucional, y otra la obligación que tienen de cumplir con la normatividad que regula su intervención en los procesos electorales locales, incluyendo la relativa a los requisitos que se deben cumplir para tener derecho a recibir financiamiento público.

6.- La equidad en materia electoral, tratándose de financiamiento público a los partidos, consiste en el derecho igualitario consignado en la ley para que todos puedan alcanzar esos beneficios, atendiendo a las circunstancias propias de cada partido, de tal manera que cada uno perciba lo que proporcionalmente le corresponde, acorde con su grado de representatividad.

7.- Debe distinguirse entre el derecho mismo para recibir financiamiento público y el porcentaje que a cada partido le corresponda. Lo primero atañe a la situación legal que autoriza y garantiza que conforme a las bases y criterios respectivos, cada

partido esté en condiciones de recibir los recursos económicos necesarios. Lo segundo, se refiere a la situación real de cada partido, que en su caso justifica el otorgamiento de mayores o menores recursos por financiamiento público, pues las circunstancias particulares de un partido no necesariamente coinciden con la de los demás, lo que justifica la aplicación de porcentajes o montos diferentes.

8.- La facultad de cada legislatura local, para regular lo atinente en esta materia, tomando como base el principio de equidad, debe traducirse necesariamente en asegurar a los partidos políticos el mismo trato, cuando se encuentren en igualdad de circunstancias, de tal manera que no exista un mismo criterio que rijan para todos ellos aunque sus situaciones particulares sean diversas. En estos términos, para satisfacer el principio de equidad que se impone en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario establecer un sistema de distribución del financiamiento público que prevea el acceso a éste de los partidos políticos, reconociendo sus distintas circunstancias.

9.- Los artículos 17, párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, y 43 bis, fracción VIII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, propagan el principio de equidad reconocido en la Ley Fundamental, en tanto que procuran que los partidos políticos reciban financiamiento público para lograr su objetivo, estableciendo las normas para acceder a tal prerrogativa.

10.- El artículo 43 bis, fracción VIII referido no trasgrede el principio de equidad referido, ya que no determina un trato diferenciado a los entes políticos, partiendo de que todos se someten a la misma reglamentación y el partido que tenga una posición distinta a otro o a los demás institutos políticos, en función de la última votación alcanzada, es decir, el que no obtenga el dos por ciento de

la votación válida estatal de diputados por el principio de mayoría relativa, no tendrá derecho a financiamiento público, pues es incuestionable que no está en la misma situación de aquéllos que sí obtuvieron el porcentaje.

Bajo esos razonamientos, se concluye en que las disposiciones relativas al financiamiento público no se oponen al artículo 41, fracción II, de la Constitución General y, consecuentemente, no pueden ser consideradas contrarias al principio de equidad, por lo que bajo esa interpretación ni el acuerdo recurrido ni su antecedente CG-143/2012 pueden ser tildados de inequitativos ni contrarios a lo establecido en el inciso g, base IV del artículo 116 Constitucional, sino por el contrario, los mismos son acordes al principio constitucional de equidad electoral, resultando por ello infundado sus argumentos tendentes a demostrar que la determinación recurrida (que encuentra su origen en el acuerdo CG-143/2012) es contraria a principios constitucionales electorales, pues ha quedado ampliamente demostrado que el solo hecho de contar con registro de Partido Político Nacional es insuficiente para tener derecho al financiamiento público que previene el artículo 43 bis del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sirve de apoyo a todo lo expresado las siguientes tesis de jurisprudencia:

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. EL ARTÍCULO 30, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE CONDICIONA SU ACCESO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL. El artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal podrá expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales de esa entidad, sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomarán en cuenta los principios rectores contenidos en los incisos b) a i) de la fracción IV del artículo 116 de la propia Constitución Federal, entre ellos, el de equidad. En esa tesitura, el artículo 121 del mencionado Estatuto dispone que los partidos políticos recibirán, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento. Ahora bien, el hecho de que el artículo 30, párrafo primero, del Código Electoral del Distrito Federal, establezca que los partidos políticos que por sí mismos hubieren obtenido por lo menos el 2% de la votación total emitida en la elección de diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de representación proporcional, tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, no viola el mencionado principio, pues, por una parte, se da un trato igual a todos aquellos partidos políticos que se encuentren en la misma situación, ya que los que no alcancen la votación

minima requerida no tendrán derecho al financiamiento público y, por otra, aun cuando los partidos políticos conserven su registro nacional, lo cierto es que si no tienen a nivel local (Distrito Federal) representatividad, al no haber alcanzado el porcentaje mínimo, es evidente que no están en situación igual a aquellos que sí obtuvieron ese porcentaje, de manera que en atención a que se trata de recursos locales y no federales, es indudable que los partidos políticos que contiendan en las elecciones del Distrito Federal, con independencia de que cuenten con registro nacional, deben estar a las disposiciones locales, las cuales al aplicar las mismas reglas a los partidos que participan en el mismo ámbito local, cumplen con el principio de equidad en materia electoral. Además, conforme al artículo 41 de la Constitución Federal, los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fines promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público; de ahí que se instituya en las disposiciones fundamentales, el otorgamiento de financiamiento público para que logren tales fines; sin embargo, por la misma razón, si dentro del ámbito local, los partidos beneficiados con este tipo de financiamiento no logran una representatividad significativa para el logro de los fines que persiguen, no se justifica el acceso al financiamiento público.⁴

EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL. NO VIOLA ESTE PRINCIPIO EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, QUE ESTABLECE LAS REGLAS GENERALES CONFORME A LAS CUALES DEBERÁ DISTRIBUIRSE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. El artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal consagra como principio rector en materia electoral la equidad en el financiamiento público entre los partidos políticos, la cual estriba en el derecho igualitario consignado en la ley para que todos los partidos puedan llevar a cabo la realización de sus actividades ordinarias y las relativas a la obtención del sufragio universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada partido, de manera tal que cada uno perciba lo que proporcionalmente le corresponda, acorde con su grado de representatividad. En congruencia con lo anterior, al establecer el artículo 69, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Morelos las reglas conforme a las cuales deberá distribuirse el financiamiento público, en efectivo o en especie, que reciban los partidos políticos con cargo al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, autorizando, por una parte, recursos ciertos y fijos (10% del monto total del financiamiento público distribuido en forma igualitaria a todos los partidos políticos registrados) y, por la otra, recursos aleatorios (40% en forma igualitaria y 50% en proporción a los votos obtenidos, para aquellos partidos que hubieren conseguido más del 3% de la votación en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior), no transgrede el principio rector de referencia, porque no da un trato diferenciado a los partidos políticos, en virtud de que todos están sujetos a la misma reglamentación y el partido que guarde una situación distinta frente a otro en función de la votación última obtenida, recibirá un trato distinto y proporcional a esa situación. Conforme al principio de equidad en materia electoral los partidos políticos se diferencian por el grado de representatividad que tengan entre los ciudadanos votantes, sin que ello limite su derecho a obtener mayores recursos si logran una representación mayor pues, de estimarse lo contrario, se llegaría al extremo de reconocer una condición igualitaria entre partidos con distinta representatividad, concediéndoles mayores derechos para la asignación de recursos a los que no hubieren obtenido una votación mayor de los que sí la tienen.⁵

Con lo anterior se da debida contestación a los agravios expresados por **Movimiento Ciudadano**, resultando innecesario referirnos específicamente a los alegatos expresados por los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y

⁴ Tesis P./J.29/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional, tomo XIX, Mayo de 2004, página 1156.

⁵ Tesis 89, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, Materia Constitucional, página 692.

Verde Ecologista de México, pues finalmente los agravios son improcedentes.

Ahora nos referiremos a los criterios invocados por el disidente en el escrito recursal, que cita como trascendentes para obtener financiamiento público, mismas que se estiman inaplicables, por las razones siguientes:

1.- La tesis “FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA. DERECHO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES A RECIBIRLO EN EL ÁMBITO LOCAL”, en virtud de la sentencia que motivo este criterio y que fue dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el once de abril de dos mil doce, se desprende que se refiere a la interpretación del artículo 41 de la ley fundamental en forma conjunta e interrelacionada con el resto de la normatividad aplicable, fundándose para ello en lo establecido en el artículo 70 del Código Comicial y 1º de su reglamento, que dispone que dicho financiamiento (para gastos de representación y sostenimiento de oficina) se otorga a todos los Partidos Políticos con registro, lo que llevó a sostener a la sala superior que respecto a los partidos políticos nacionales se les debía de suministrar tal financiamiento, lo que viene a demostrar que la legislación electoral del Estado de Campeche no guarda identidad con la de nuestro Estado, pues son preceptos que regulan cuestiones distintas, ya que nuestra legislación no previene esa partida, además de que el tema central de esta impugnación no fue materia de análisis en esa resolución, a saber, que un partido político tenga derecho a financiamiento sin haber satisfechos los requisitos establecidos en la normatividad local.

2.- En la misma tesitura se encuentra la tesis “FINANCIMIENTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 72, FRACCIÓN I,

INCISO F), DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATAN, VIOLA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AL IMPEDIR QUE SE DESTINE PARA SUFRAGAR SUELDOS, BONOS O COMPENSACIONES DE DIRECTIVOS Y/O EMPLEADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE EN LA ÚLTIMA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA NO HAYAN OBTENIDO CUANDO MENOS EL 2% DE LA VOTACIÓN EMITIDA”, en virtud de que no se ocupa de determinar que todos los partidos políticos deben de tener derecho a financiamiento, con independencia, de que no cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad estatal, sino únicamente de la aplicación de un rubro del financiamiento, por lo que dicha hipótesis no guarda relación con el asunto que nos ocupa, ya que se reitera no analiza un caso idéntico al que nos ocupa, que consiste en la pretensión de inobservar las reglas fijadas para la asignación del financiamiento público a los Partidos Políticos, esto es, que no sea requisito para acceder dicho derecho el haber obtenido más del dos por ciento de la votación.

3.- De igual manera las tesis que tienen como rubro: “*LA FRACCIÓN I DEL INCISO A) DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA, QUE ESTABLECEN UN ESCALONAMIENTO DE LOS PORCENTAJES POR ESE CONCEPTO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO TRASGREDEN LOS ARTÍCULOS 41, BASE II, INCISO A) Y 116, FRACCIÓN IV, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS*” y “*FINANCIAMIENTO PÚBLICO ANUAL. EL ARTÍCULO 62, PÁRRAFO 1, INCISO A),*

FRACCIÓN II DEL CODIGO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA, QUE DISPONE QUE EL 50% DE AQUÉL, DESTINADO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SE ASIGNE DE MANERA PROPORCIONAL CONFORMA A LOS RESULTADOS QUE HUBIERAN OBTENIDO EN LA ELECCIÓN INMEDIATA ANTERIOR DE DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA, NO TRASGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL”, no cobran aplicación, en virtud de que se refiere a supuestos distintos al que nos ocupa, sin que se refieran al tema materia del recurso, esto es, no hacen pronunciamiento alguno de que sea ilegal la determinación de que los Partidos Políticos Nacionales no tengan derecho a financiamiento público si no satisfacen las exigencias establecidas en la Constitución local y la ley comicial.

En esta tesitura, por los motivos expuestos no puede estimarse violación alguna a los principios constitucionales de derecho electoral, pues el proveído impugnado es acorde al principio de legalidad electoral.

Así, ante lo infundado de los agravios expresados por el disidente, de cualquier manera el disidente no obtendría un fallo favorable a sus intereses, pues en los términos del análisis que antecede se confirmaría el acuerdo CG/001/2013, de fecha dieciocho de enero de dos mil trece, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, debiéndose reiterar, que el estudio emprendido solo fue con la finalidad de ser exhaustivos y descartar cualquier violación en contra del Partido Político Movimiento Ciudadano.

OCTAVO.- Por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución, se actualizan las causas de improcedencia establecidas en las fracciones II y IV del artículo 325 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, por lo que con fundamento en la fracción IV del numeral 326 de la ley Comicial debe **sobreseerse** la impugnación interpuesta por el Partido Político Movimiento Ciudadano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 286, 287, 288, 289, 298, 300, 301, 307, 308, 317, 327, 328, 335 y 352 Bis, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato; así como los numerales 19, 21 fracción III, 88 y 89 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato; esta Sala

RESUELVE:

PRIMERO.- Esta Sala del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, interpuesto por el partido político **Movimiento Ciudadano**.

SEGUNDO.- Se decreta el **sobreseimiento** del recurso de revisión, identificado con el número 01/2013-IV, interpuesto por Luis González Reyes, representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y octavo de esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución de manera **personal** al partido político recurrente, en su domicilio que para tal efecto designó en esta ciudad capital; a los Terceros Interesados, Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México en los domicilios que tienen señalados para tal efecto; y por **oficio** a la autoridad administrativa responsable, Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de su Presidente; y por **estrados** a cualquier otra persona con interés en la presente instancia, adjuntándose en todos los supuestos copia certificada del presente proveído.

Así lo resolvió y firma el ciudadano Magistrado Electoral que integra la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, Licenciado **Héctor René García Ruiz**, que actúa legalmente con Secretario, Licenciado **José Israel Martínez Vidal**, que autoriza y da fe.

----- DOS FIRMAS ILEGIBLES -----

EL SUSCRITO, LICENCIADO JOSÉ ISRAEL MARTÍNEZ VIDAL, SECRETARIO DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO; -----

----- C E R T I F I C O: -----

Que la presente copia en cuarenta y siete fojas útiles, debidamente cotejadas y selladas, corresponden íntegramente a la resolución de fecha veintisiete de febrero de dos mil trece, dictada por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato cuyo original obra en el expediente 01/2013-IV, integrado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el ciudadano licenciado Luis González Reyes.

Lo que certifico en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 26, fracción X, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y en cumplimiento de lo ordenado en el propio auto.- Doy fe.

Guanajuato, Guanajuato, a veintisiete de febrero de dos mil trece.

**Lic. José Israel Martínez Vidal.
Secretario de la Cuarta Sala Unitaria
del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato.**